



VERSIÓN PÚBLICA

Expediente: COND-002-2017-I

Folios: 1419 al 1463

Unidad Administrativa que clasifica:
Secretaría Técnica.

Número de acta y fecha en la que se aprobó por el Comité:
COT-031-2019 - 28 de agosto de 2019

Descripción del documento:

Versión pública de la resolución emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica el cuatro de julio de dos mil diecinueve en el expediente COND-002-2017-I

La información testada con "A" y "B" es **confidencial** de conformidad con lo siguiente:

ID	Tipo de Información	Fundamentación
A	Datos personales de personas físicas identificadas o identificables	Artículos 113, fracción I de la <i>Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública</i> , 116, párrafo primero de la <i>Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública</i> , así como Trigésimo octavo de los <i>Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas</i> , en relación con los artículos 3, fracción IX, 124 y 125 de la <i>Ley Federal de Competencia Económica</i> , toda vez que se trata de datos personales cuya difusión requiere el consentimiento de su titular.
B	Información entregada con ese carácter a la Comisión (datos de persona moral)	Artículos 113, fracción III, de la <i>Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública</i> , 116, último párrafo, de la <i>Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública</i> , así como Cuadragésimo de los <i>Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas</i> , en relación con los artículos 3, fracción IX, 124 y 125 de la <i>Ley Federal de Competencia Económica</i> , toda vez que comprende hechos y actos de carácter jurídico o administrativo, relativos a una persona y su difusión puede causar un daño o perjuicio en la posición competitiva de su titular.

Páginas que contiene información clasificada: 3, 4, 6, 7, 13, 14, 16, 19, 20, 25, 26, 35, 38, 39, 40, 41 y 42.


Fidel Gerardo Sierra Aranda
Secretario Técnico


Myrna Mustieles García
Directora General de Asuntos Jurídicos



1419

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

Ciudad de México, a cuatro de julio de dos mil diecinueve.- Vistas las constancias que integran el expediente citado al rubro, relativo a la verificación de cumplimiento y ejecución de la resolución emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica el nueve de marzo de dos mil diecisiete en el expediente CNT-058-2016, con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo cuarto y vigésimo, fracciones I y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 10, 12, fracciones I, X y XXX, 18, 91, fracciones IV, V y último párrafo, 121, 127, fracción IX, 132 y 133 de la Ley Federal de Competencia Económica;¹ 1, 16, segundo párrafo, y 30 de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica;² 1, 4, fracción I, y 5, fracciones I, VI, XXVII y XXXIX, 6, 7 y 8 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica;³ el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica resuelve en sesión celebrada el mismo día, de conformidad con los antecedentes y consideraciones de derecho que a continuación se expresan:

GLOSARIO:

Para facilitar la lectura del presente documento, se utilizarán los siguientes términos:

ACUERDO COND	Acuerdo emitido por el ST de la COFECE el dieciocho de abril de dos mil diecisiete en el EXPEDIENTE CNT.
ACUERDO DE INICIO	Acuerdo emitido por el ST de la COFECE el veinticinco de abril de dos mil diecinueve en el EXPEDIENTE.
CFPC	Código Federal de Procedimientos Civiles, cuya última reforma aplicable es la publicada en el DOF el nueve de abril de dos mil doce, de aplicación supletoria en lo no previsto por la LFCE y las DRLFCE, en términos del artículo 121 de la LFCE.
COFECE	Comisión Federal de Competencia Económica.
DGAJ	Dirección General de Asuntos Jurídicos de la COFECE o su titular, según corresponda.
DISPOSICIONES REGULATORIAS	Disposiciones Regulatorias de la LFCE publicadas en el DOF el diez de noviembre de dos mil catorce, aplicables al presente procedimiento.
DOF	Diario Oficial de la Federación.

¹ Publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación ("DOF"), cuya última reforma se publicó en el DOF el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.

² Publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el DOF, cuya última reforma se publicó en el DOF el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.

³ Publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce, cuya última reforma se publicó en el DOF el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

ESCRITO DE ACEPTACIÓN	Escrito presentado en la OFICIALÍA el tres de abril de dos mil diecisiete, al cual le correspondió el número de registro 124354, signado por el PROMOVENTE.
ESCRITO DE MANIFESTACIONES	Escrito presentado en la OFICIALÍA el ocho de mayo de dos mil diecinueve en el EXPEDIENTE mediante el cual el Promovente realizó diversas manifestaciones en relación con el ACUERDO DE INICIO y ofreció diversas pruebas.
ESCRITO I	Escrito presentado en la OFICIALÍA el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, al cual le correspondió el número de registro 143463, signado por el PROMOVENTE.
ESCRITO II	Escrito presentado en la OFICIALÍA el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, al cual le correspondió el número de registro 143912, signado por el PROMOVENTE.
ESCRITO III	Escrito presentado en la OFICIALÍA el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, al cual le correspondió el número de registro 144717, signado por el PROMOVENTE.
EXPEDIENTE	Expediente COND-002-2017-I.
EXPEDIENTE CNT	Expediente CNT-058-2016.
EXPEDIENTE COND	Expediente COND-002-2017.
G500	G500, S.A.P.I de C.V.; Administradora de Gasolineras Esmegas, S.A. de C.V.; El Faro de Santander, S.A. de C.V.; Energéticos Tec, S.A. de C.V.; Fuente las Varas, S.A. de C.V.; Gasolinera Valle de Guadalupe, S.A. de C.V.; Gasomira, S.A. de C.V.; Grupo Jimmex, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Aja Gomez, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Igova, S.A. de C.V.; Puente los Arrollos, S.A. de C.V.; Puerto Alisas, S.A. de C.V.; Río Tuerto, S.A. de C.V.; Servicio Alisas, S.A. de C.V.; Servicio Caseta El Dorado, S.A. de C.V.; Servicio Cubija, S.A. de C.V.; Servicio Cubija II, S.A. de C.V.; Servicio el Escudo, S.A. de C.V.; Servicio el Rescaño, S.A. de C.V.; Servicio Jinetes, S.A. de C.V.; Servicio la Montañesa, S.A. de C.V.; Servicio Lomas de las Palmas, S.A. de C.V.; Servicio Lomas de Vista Hermosa, S.A. de C.V.; Servicio Ojo de Agua, S.A. de C.V.; Servicio Solares, S.A. de C.V.; Servicio Tecámac San Cipriano, S.A. de C.V.; Servicio Tenayuca, S.A. de C.V.; Servicio Tres Encinas, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos Alfareros, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos de Tizayuca, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos de Zumpango, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos Hergom, S.A. de C.V.; Operadora de Servicios Reforma,



1421

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

S.A. de C.V.; Oitaben Gas, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos Mexiquenses, S.A. de C.V.; Gasolinera Montevideo, S.A. de C.V.; Servicio Grillos, S.A. de C.V.; Servicio Isaura, S.A. de C.V.; Servicio Serrano, S.A. de C.V.; Servicio Ventura Puente, S.A. de C.V.; Servicio Gomasa S.A. de C.V.; Servicios Galabria, S.A. de C.V.; Novogas Tollocan, S.A. de C.V.; Grupo Ejército, S.A. de C.V.; Operadora Ermita, S.A. de C.V.; Consorcio Plan, S.A. de C.V.; Consorcio Río Consulado, S.A. de C.V.; Servieje, S.A. de C.V.; Servicio Gasget, S.A. de C.V.; Servicio Cualimex, S.A. de C.V.; Servicio Santalbi, S.A. de C.V.; JAPI, S.A. de C.V.; Operadora Aguesu, S.A. de C.V.; Servicio el Hueso, S.A. de C.V.; y Luis Caballero Navarro.

LFCE	Ley Federal de Competencia Económica Publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el DOF, cuya última reforma se publicó el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
OFICIALÍA	Oficialía de partes de la COFECE.
PLENO	Pleno de la COFECE.
PROMOVENTE	A , en su carácter de autorizado en términos del artículo 111, segundo párrafo, de la LFCE dentro del EXPEDIENTE CNT por parte de los NOTIFICANTES.
RESOLUCIÓN	La resolución emitida por el Pleno de la COFECE el nueve de marzo de dos mil diecisiete en el EXPEDIENTE CNT.
SAT	Servicio de Administración Tributaria
ST	Secretario Técnico de la COFECE.

Eliminado: cuatro palabras.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- El nueve de junio de dos mil dieciséis, G500, S.A.P.I. de C.V. notificó a la COFECE su intención de realizar una concentración en términos del artículo 90 de la LFCE, misma que radicó en el EXPEDIENTE CNT.⁴

Mediante escritos presentados en la OFICIALÍA el quince de agosto de dos mil quince, los representantes legales de diversas personas físicas y morales⁵ ratificaron en todos sus términos el escrito de notificación de nueve de junio de dos mil dieciséis.

⁴ Folios 001 a 022 del EXPEDIENTE CNT.

⁵ Administradora de Gasolineras Esmegas, S.A. de C.V.; El Faro de Santander, S.A. de C.V.; Energéticos Tec, S.A. de C.V.; Fuente las Varas, S.A. de C.V.; Gasolinera Valle de Guadalupe, S.A. de C.V.; Gasomira, S.A. de C.V.; Grupo Jimmex, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Aja Gomez, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Igova, S.A. de C.V.; Puente los Arrollos, S.A. de C.V.; Puerto Alisas, S.A. de C.V.; Río Tuerto, S.A. de C.V.; Servicio Alisas, S.A. de C.V.; Servicio Caseta El Dorado, S.A. de C.V.; Servicio Cubija,

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

SEGUNDO.- El PLENO emitió RESOLUCIÓN en que estableció lo siguiente:

“ [...]

Tercero. - Como se mencionó en la Consideración de Derecho Segunda, la concentración notificada por G500 es la formación de un consorcio de compra mediante la integración de cincuenta y cuatro (54) socios iniciales operadores de estaciones de servicio, conformación que se incrementará en la medida en que más estaciones de servicio se incorporen, tal y como se acredita de las constancias que obran en autos y de las manifestaciones de G500.

[...]

G500 señala que está en proceso la incorporación de otros empresarios y estaciones de servicio en veinte (20) entidades federativas, con el objetivo de alcanzar un número de hasta B socios accionistas y señaló que en un futuro podrían agregarse nuevos socios, incluso para llegar a un número de entre B estaciones de servicio. Es decir, el consorcio de compras G500 cuenta con una naturaleza dinámica y potencialmente continuará creciendo en el futuro.

Así, la concentración en análisis implica dos momentos, el primero consistente en los cincuenta y cuatro (54) socios iniciales que notificaron la operación y que son los que esta autoridad en este momento conoce y concluye que dicha incorporación en G500 no disminuye, daña o impide la libre concurrencia o la competencia económica. El segundo es la incorporación en G500 de socios potenciales operadores de estaciones de servicio, de los cuales no se tiene certeza de cuáles serán estos socios definitivos o los que continuarán agregándose hasta llegar a B como se plantea en la documentación que integra el expediente en que se actúa.

Esta autoridad se encuentra ante una imposibilidad jurídica y material de análisis sobre la pretensión de G500 y por lo tanto conocer los efectos de la concentración por la incorporación de nuevos socios: Es por ello que esta autoridad no puede autorizar la incorporación de nuevos socios que no conoce y medir los efectos en competencia por cada incorporación de las estaciones de servicio. [...]

Cuarta. [...]

Al respecto, el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, las Partes presentaron una propuesta de condiciones con fundamento en lo establecido en los dos últimos párrafos del artículo 90 de la LFCE. En su escrito, las Partes señalaron, entre otros, lo siguiente:

[...]

S.A. de C.V.; Servicio Cubija II, S.A. de C.V.; Servicio el Escudo, S.A. de C.V.; Servicio el Rescaño, S.A. de C.V.; Servicio Jinetes, S.A. de C.V.; Servicio la Montañesa, S.A. de C.V.; Servicio Lomas de las Palmas, S.A. de C.V.; Servicio Lomas de Vista Hermosa, S.A. de C.V.; Servicio Ojo de Agua, S.A. de C.V.; Servicio Solares, S.A. de C.V.; Servicio Tecámac San Cipriano, S.A. de C.V.; Servicio Tenayuca, S.A. de C.V.; Servicio Tres Encinas, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos Alfareros, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos de Tizayuca, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos de Zumpango, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos Hergom, S.A. de C.V.; Operadora de Servicios Reforma, S.A. de C.V.; Oitaben Gas, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos Mexiquenses, S.A. de C.V.; Gasolinería Montevideo, S.A. de C.V.; Servicio Grillos, S.A. de C.V.; Servicio Isaura, S.A. de C.V.; Servicio Serrano, S.A. de C.V.; Servicio Ventura Puente, S.A. de C.V.; Servicio Gomasa S.A. de C.V.; Servicios Galabria, S.A. de C.V.; Novogas Toluca, S.A. de C.V.; Grupo Ejército, S.A. de C.V.; Operadora Ermita, S.A. de C.V.; Consorcio Plan, S.A. de C.V.; Consorcio Río Consulado, S.A. de C.V.; Servieje, S.A. de C.V.; Servicio Gasget, S.A. de C.V.; Servicio Cualimex, S.A. de C.V.; Servicio Santalbi, S.A. de C.V.; JAPI, S.A. de C.V.; Operadora Aguesu, S.A. de C.V.; Servicio el Hueso, S.A. de C.V.; y Luis Caballero Navarro.

Eliminado: trece palabras.

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

La Propuesta de Condiciones se transcribe a continuación:⁶

[...]

Sin embargo, se considera hacer las siguientes precisiones a las condiciones presentadas por G500, a saber:

A. En el numeral 4 se establece:

"4.- Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación del aviso, la Comisión podrá emitir un acuerdo mediante el cual se indique que, de manera previa y antes de que el socio(s) potencial(es) de que se trate(n) sea(n) admitido(s), incorporado(s), integrado(s) o forme(n) parte de G500, como socios, accionistas o miembros, los agentes económicos involucrados en la operación deberán solicitar la autorización de la operación mediante la notificación de la operación a la Comisión en términos del procedimiento establecido en el artículo 90 de la LFCE, la Comisión podrá emitir una orden en la que se señale que para la incorporación del socio(s) potencial(es) de que se trate(n), los agentes económicos involucrados en la operación deberán notificarlo a la Comisión en términos del artículo 86, último párrafo, de la LFCE y conforme al procedimiento previsto en el artículo 90 de la LFCE."

Al respecto, "los agentes económicos involucrados en la operación" se comprenderán a aquellos que por virtud de cualquier acto jurídico pretenda ser admitido, incorporado o integrado a G500 o que de cualquier manera forma parte de G500.

Aunado a lo anterior, la notificación que pudiera requerir la Comisión en términos del numeral que se precisa, implica sujetarse a las disposiciones del Título III, Capítulo I de la LFCE, "Del Procedimiento de Notificación de Concentraciones", excepto por lo establecido en los artículos 86 y 92. Lo anterior, para que esta Comisión en el ejercicio de sus facultades se encuentre en posibilidad de prevenir posibles efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado.

B. A efecto de que G500 y los socios iniciales den cumplimiento a los compromisos, quedarán obligados a hacer del conocimiento de los socios potenciales esta resolución.

A efecto de que [sic] dar cumplimiento a los compromisos presentados por G500, y para que esta Comisión pueda evaluar el efecto de la incorporación de cada nuevo socio potencial a G500, ésta y los socios iniciales, así como eventualmente los socios potenciales que estén incorporados a G500, deberán presentar información actualizada, a más tardar los días 30 de enero de cada año, de lo siguiente:

- a. Los socios iniciales y los posteriores que formen parte de G500 deberán entregar el volumen anual de ventas (en litros) y el valor anual de ventas (en pesos mexicanos, de cada uno de los tipos de gasolina y diésel que ofreció, el año anterior al informe; el valor anual de ventas (en pesos mexicanos) de aceites, aditivos, anticongelantes y otros productos automotrices ("productos automotrices"), para el año anterior al informe; el valor anual de ventas (en pesos mexicanos) de productos de otra índole (i.e. alimentos, bebidas y productos de consumo), para el año anterior al informe.
- b. Entregar información concerniente a los proveedores de combustible y de los servicios de logística.

Lo anterior, sin perjuicio de la información que la Comisión pueda requerir en cualquier momento.

[...]

RESUELVE

⁶ "Folios 5593 al 5597."

Handwritten signatures and initials.



Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

PRIMERO. Se autoriza la concentración notificada por [G500] para la integración en el consorcio de compra de combustible y otros productos de conformidad con la Consideración de Derecho Segunda.

SEGUNDO. Se objeta la realización de la operación respecto a lo que [G500] denomina como la incorporación de socios potenciales, según obra en autos, y de conformidad con la consideración de Derecho Tercera de esta Resolución.

TERCERO.- Se sujeta la autorización de la integración de socios potenciales a G500, S.A.P.I. de C.V. señalada en el Resolutivo Segundo al cumplimiento de las condiciones expuestas en las Consideraciones de Derecho Cuarta y Quinta de esta resolución, de conformidad con el artículo 90, fracción V, párrafo tercero, de la LFCE. En caso del incumplimiento de las condiciones, se tramitará el incidente correspondiente en términos de los artículos 132 y 133 de la LFCE y se sancionará conforme a lo dispuesto por el artículo 127, fracción IX y, en su caso, en términos de la fracción II del artículo 127 del mismo ordenamiento.

CUARTO.- Para efectos del RESOLUTIVO TERCERO, las Partes deberán presentar por escrito la aceptación incondicional y total de las condiciones expuestas en la Consideración de Derecho Cuarta de esta resolución, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución. Lo anterior en el entendido de que en caso de no presentar dicha aceptación dentro del plazo señalado se estará al RESOLUTIVO SEGUNDO.

[...] [Énfasis añadido].⁷

TERCERO.- El tres de abril de dos mil diecisiete G500 presentó el ESCRITO DE ACEPTACIÓN, mediante el cual aceptó las condiciones impuestas en la RESOLUCIÓN en los términos referidos en la misma, como se desprende de la siguiente transcripción:

“Aceptamos incondicional y totalmente las condiciones expuestas en la Consideración de Derecho Cuarta de la Resolución que dictó el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica dentro del expediente en que se actúa, el nueve de marzo del año en curso. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.”⁸

CUARTO.- El ST emitió el ACUERDO COND mediante el cual, entre otras cuestiones, (i) tuvo por presentado el ESCRITO DE ACEPTACIÓN y por aceptadas en tiempo y forma las condiciones impuestas en la RESOLUCIÓN; (ii) ordenó crear el EXPEDIENTE COND y lo turnó a la Dirección General de Concentraciones para tramitar el procedimiento de verificación del cumplimiento.

QUINTO.- G500 presentó el ESCRITO I en el que proporcionó documentación relacionada con el cumplimiento a lo establecido en el inciso (B) de la Cuarta Consideración de Derecho de la RESOLUCIÓN e informó que diversas sociedades “manifestaron su deseo de ya no formar parte de G500.”⁹

⁷ Folios 038, 039, 042 a 049 del EXPEDIENTE. En adelante, todas las referencias a folios se harán respecto del EXPEDIENTE salvo señalamiento específico en contrario.

⁸ Folio 059.

⁹ A saber: i. Servicio Lomas de Vista Hermosa, S.A. de C.V.; ii. Operadora de Servicios Reforma, S.A. de C.V.; iii. Servicio Lomas de las Palmas, S.A. de C.V.; iv. Servicio Caseta El Dorado, S.A. de C.V.



1425

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

SEXTO.- G500 presentó el ESCRITO II en el que proporcionó documentación en alcance al ESCRITO I.¹⁰

SÉPTIMO.- G500 presentó el ESCRITO III en el que proporcionó documentación en alcance al ESCRITO I y al ESCRITO III e informó que diversas sociedades “manifestaron su deseo de ya no formar parte de G500.”¹¹

OCTAVO.- El ST emitió el ACUERDO DE INICIO del EXPEDIENTE, el veinticinco de abril de dos mil diecinueve mediante el cual, entre otras cuestiones, (i) ordenó la creación del EXPEDIENTE para el trámite del incidente de cumplimiento y ejecución de la RESOLUCIÓN, (ii) lo turnó a la DGAJ, (iii) otorgó un plazo de cinco días hábiles para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y en su caso, ofrecieran los medios de prueba que estimaran pertinentes; y (iv) otorgó un plazo de diez días hábiles para que presentaran los estados financieros y/o su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho.¹²

NOVENO.- G500 presentó el ESCRITO DE MANIFESTACIONES¹³ y mediante acuerdo de DGAJ de catorce de mayo de dos mil diecinueve se tuvo por presentado y se le previno para que en un plazo de cinco días relacionara el ofrecimiento de las pruebas con el hecho o hechos que se tratan de demostrar y aclarara si la instrumental de actuaciones se refería a las constancias que integran el EXPEDIENTE.¹⁴

DÉCIMO.- El quince y dieciséis de mayo de dos mil diecinueve G500 presentó en la OFICIALÍA dos escritos, por medio de los cuales entregó diversas declaraciones anuales de impuestos correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciocho.¹⁵

B

¹⁰ Folios 077 a 082.

¹¹

B

B

¹² Folios 001 a 014. Dicho acuerdo se notificó por comparecencia el treinta de abril de dos mil diecinueve. Folios 015 a 017.

¹³ Folios 090 a 185.

¹⁴ Folios 186 a 188. Dicho acuerdo se notificó por comparecencia el veinte de mayo de dos mil diecinueve. Folios 1251 a 1253.

¹⁵ Folios 189 a 1250.

Wuy



1426

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

DÉCIMO PRIMERO.- El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, la DGAJ emitió acuerdo en que, entre otras cuestiones, se tuvieron por presentados los escritos de quince de mayo de dos mil diecinueve presentados por G500.¹⁶

En la misma fecha, el ST emitió el oficio ST-CFCE-2019-083 en que solicitó al SAT las declaraciones anuales de impuestos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho de los notificantes que no desahogaron el requerimiento realizado en el ACUERDO DE INICIO.¹⁷

DÉCIMO SEGUNDO.- El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, G500 presentó en la OFICIALÍA un escrito, mediante el cual desahogó la prevención al ofrecimiento de pruebas realizada en el acuerdo de catorce de mayo de dos mil diecinueve.¹⁸

DÉCIMO TERCERO.- El treinta de mayo de dos mil diecinueve, el SAT presentó en la OFICIALÍA el oficio 400-01-02-00-00-2019-0255, mediante el cual presentó las declaraciones anuales de impuestos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho solicitadas.¹⁹

DÉCIMO CUARTO.- El seis de junio de dos mil diecinueve, la DGAJ emitió dos acuerdos mediante los cuales: (i) admitió las pruebas ofrecidas por G500 y le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para que presentaran sus alegatos por escrito,²⁰ y (ii) tuvo por presentada la información y documentos presentados por el SAT.²¹

DÉCIMO QUINTO.- El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, G500 presentó por escrito sus alegatos²² y mediante acuerdo de veinte del mismo mes y año se tuvieron por presentados y se tuvo por integrado el EXPEDIENTE.²³

II. CONSIDERACIONES DE DERECHO

PRIMERO.- El PLENO es la autoridad competente para resolver el presente incidente de verificación de cumplimiento y ejecución de la RESOLUCIÓN, con fundamento en lo establecido en los artículos citados en el proemio de la presente resolución.

SEGUNDO.- Para determinar el cumplimiento y ejecución de la RESOLUCIÓN se deben considerar los términos en los que fue emitida, específicamente respecto a las condiciones cuyo posible incumplimiento motivó la apertura del incidente de mérito, según lo establecido en el ACUERDO DE INICIO del EXPEDIENTE.

La materia del EXPEDIENTE versa respecto del probable incumplimiento referido en el ACUERDO DE INICIO del EXPEDIENTE y, en consecuencia, no prejuzga ni puede entenderse como un

¹⁶ Folios 1254 a 1256. Dicho acuerdo se notificó por lista el veintidós de dos mil diecinueve.

¹⁷ Folios 1257 y 1258. Dicho acuerdo se notificó por oficio el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.

¹⁸ Folios 1259 a 1269.

¹⁹ Folios 1270 a 1389.

²⁰ Folios 1390 a 1395. Dicho acuerdo se notificó por lista el siete de junio de dos mil diecinueve.

²¹ Folios 1396 a 1399. Dicho acuerdo se notificó por lista el siete de junio de dos mil diecinueve.

²² Folios 1400 a 1416.

²³ Folios 1417 y 1418. Dicho acuerdo se notificó por lista el veintiuno de junio de dos mil diecinueve.

pronunciamiento respecto de otras condiciones y obligaciones previstas en la RESOLUCIÓN que no forman parte de la materia del presente incidente.

En el ACUERDO DE INICIO del EXPEDIENTE se realizaron las siguientes consideraciones:

[...]

Sexto.- En la RESOLUCIÓN se estableció lo siguiente:

[...]

Del texto transcrito se advierte que las obligaciones a cargo son las siguientes:

- *Dar aviso a la Comisión de los socios potenciales que pretendan incorporarse a G500, S.A.P.I. de C.V., y*
- *Presentar un informe anual a más tardar el día treinta de enero de cada año que incluya (1) el valor anual de ventas (en pesos mexicanos) de (i) cada uno de los tipos de gasolina y diésel [y el volumen anual de ventas (en litros)]; (ii) aceites, aditivos, anticongelantes y otros productos automotrices ("productos automotrices"); y (iii) de productos de otra índole (alimentos, bebidas y productos de consumo); así como (2) la información concerniente a los proveedores de combustible y de los servicios de logística.*

En relación con la segunda obligación, se advierte que el promovente presentó el ESCRITO DE DESAHOGO PARCIAL el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve; esto es, fuera del plazo establecido en la RESOLUCIÓN.²⁴

Séptimo. Derivado de lo anterior y toda vez que conforme a la información referida se considera que podría existir un incumplimiento a lo establecido en la RESOLUCIÓN, se ordena la creación del Expediente COND-002-2017-I para el trámite del incidente de cumplimiento y ejecución de la RESOLUCIÓN y, de oficio, se da inicio al procedimiento a que se refieren los artículos 132 y 133 de la LFCE.

[...]"

Esto es, el ACUERDO DE INICIO prevé un probable incumplimiento a la resolución del expediente puesto que: "En relación con la segunda obligación, se advierte que el promovente presentó el ESCRITO DE DESAHOGO PARCIAL el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, esto es, fuera del plazo establecido en la RESOLUCIÓN" siendo que tiene, a más tardar hasta el treinta de enero de cada año para presentar información concerniente a tal obligación.

III. MANIFESTACIONES

TERCERO.- En el ESCRITO DE MANIFESTACIONES G500 señaló diversos argumentos cuya síntesis se inserta a continuación y que se agruparon conceptualmente con objeto de exponer mejor las líneas de argumentación en: a) cuestión previa; b) argumentos dirigidos a combatir la presentación extemporánea del informe anual; y c) argumentos dirigidos a la motivación de los elementos de análisis para la imposición de multas conforme al caudal probatorio del presente procedimiento.

²⁴ "La RESOLUCIÓN establece que el informe anual deberá presentarse a más tardar los días treinta de enero de cada año."

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

En esta sección también se analizan tanto las pruebas en las que se sostuvo el ACUERDO DE INICIO como las pruebas ofrecidas para acreditar su dicho. En ese sentido y para facilitar la lectura de dicho análisis, se hacen las siguientes aclaraciones:

De conformidad con el artículo 121 de la LFCE, es aplicable supletoriamente el CFPC, por lo que en los casos en que no exista disposición alguna dentro de la normativa de competencia referente a valoración de pruebas, se realizará la valoración de las mismas de conformidad con lo dispuesto en el CFPC.

Así, en términos de los artículos 84 de la LFCE y 197 del CFPC, este PLENO goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas, determinar el valor y alcance de las mismas y fijar el resultado final de dicha valoración.

Ahora bien, en lo que concierne a la valoración que se da respecto de los elementos de convicción enunciados en el presente capítulo, deberá entenderse, a efecto de evitar repeticiones innecesarias, que éstos son valorados teniéndose por señalados en cada uno de ellos los artículos y los criterios judiciales aquí referidos, dependiendo de la clasificación que se haya dado a los mismos.

Finalmente, los medios de convicción referidos como **documentales públicas, documentales privadas, o copias simples e impresiones** o y que hayan sido presentados por los notificantes, inicialmente probarán plenamente en su contra, de conformidad con el artículo 210 del CFPC.²⁵

²⁵ Sirven de apoyo los siguientes criterios del PJF siguientes: (i) ***“COPIAS FOTOSTATICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE. No es válido negar el carácter de prueba a las copias fotostáticas simples de documentos, puesto que no debe pasar inadvertido que conforme a diversas legislaciones, tales instrumentos admiten ser considerados como medios de convicción. Así el Código Federal de Procedimientos Civiles previene, en su artículo 93, que: ‘La ley reconoce como medios de prueba: ... VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia...’ El artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece a su vez que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse, entre otros elementos probatorios, ‘... de cualquier cosa...’ Dentro de estas disposiciones es admisible considerar comprendidas a las copias fotostáticas simples de documentos, cuya fuerza probatoria mayor o menor, dependerá del caso concreto y de las circunstancias especiales en que aparezcan aportadas al juicio. De este modo, la copia fotostática simple de un documento hace prueba plena en contra de su oferente, porque cabe considerar que la aportación de tal probanza al juicio lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su original. Esto es así porque las partes aportan pruebas con el objeto de que el juzgador verifique las afirmaciones producidas por aquéllas en los escritos que fijan la litis; por tanto, si se aporta determinado medio de convicción, es porque el oferente lo considera adecuado para servir de instrumento de verificación a sus afirmaciones. No es concebible que el oferente presente una prueba para demostrar la veracidad de sus asertos y que, al mismo tiempo, sostenga que tal elemento de convicción, por falso o inauténtico, carece de confiabilidad para acreditar sus aseveraciones. En cambio la propia copia fotostática simple no tendría plena eficacia probatoria respecto a la contraparte del oferente, porque contra ésta ya no operaría la misma razón y habría que tener en cuenta, además, que ni siquiera tendría la fuerza probatoria que producen los documentos simples, por carecer de uno de los elementos constitutivos de éstos, como es la firma autógrafa de quien lo suscribe y, en este caso, la mayor o menor convicción que produciría, dependería de la fuerza probatoria que proporcionaran otras probanzas que se relacionaran con su autenticidad [Énfasis añadido]”***. Jurisprudencia I.4o.C. J/5; 9a. Época; TCC; SJF; III, enero de 1996; Pág. 124; Registro: 203516;

Una vez puntualizado lo anterior, se detalla lo siguiente:

Documentales públicas

A las pruebas valoradas en el presente capítulo que constituyen documentales públicas en términos de los artículos 93, fracción II y 129 del CFPC, se les otorga el valor probatorio que establecen los artículos 130 y 202 de ese ordenamiento y constituyen prueba plena respecto de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que proceden. En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una **documental pública** se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

Documentales privadas

En cuanto a las pruebas valoradas en el presente capítulo, que en términos de los artículos 93, fracción III y 133 del CFPC constituyen documentales privadas, se les da el valor probatorio que le otorgan los artículos 203, 204, 205, 208, 209 y 210 del CFPC. En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una **documental privada** se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

Copias simples o impresiones

A las pruebas valoradas en el presente capítulo, que constituyen copias simples o impresiones, en términos de lo establecido por el artículo 93, fracciones VII y 188 CFPC, les corresponde el

(ii) “**COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES CUYO CONTENIDO RECONOCE EL QUEJOSO. TIENEN VALOR PROBATORIO PLENO.** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley de Amparo, el valor de las pruebas fotográficas, taquígráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, carácter que tienen las copias fotostáticas, por ser reproducciones fotográficas de documentos, quedan al prudente arbitrio del juzgador; por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio debe otorgársele valor probatorio a la documental exhibida por el quejoso en el juicio de amparo, consistente en un escrito que dirigió a la autoridad responsable, si aquél la reconoció como veraz [Énfasis añadido]”. Tesis Aislada VII.2o.A.T.9 K; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo X, noviembre de 1999; Pág. 970; Registro No. 192 931; y iii) “**DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE.** Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio [Énfasis añadido]”. Tesis Aislada VII.2o.A.T.9 K; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo X, noviembre de 1999; Pág. 970; Registro No. 192 931.

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

valor probatorio que otorgan los artículos 197, 207 y 217 del CFPC. Para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de **copias simples o impresiones** se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

Instrumental de actuaciones, así como presuncional legal y humana

En cuanto a las pruebas valoradas en el presente capítulo, que consisten en las constancias y actuaciones del EXPEDIENTE CNT, EXPEDIENTE COND y EXPEDIENTE,²⁶ les corresponde el valor probatorio ya sea de **documental pública** o **documental privada**.

Asimismo, a la presuncional legal y humana les corresponde el valor que otorgan los artículos 93, fracciones II, III, IV, VI y VII, 129, 133, 143, 165, 188 y 197 del CFPC dichos artículos y el otorgado por los artículos 93, fracción VIII, 190 y 197 del mismo ordenamiento.

No obstante, las mismas no arrojan información que sea favorable a los intereses de G500.

Hechos notorios

Ahora bien, a fin de evitar repeticiones innecesarias, al referir que se está frente a un **hecho notorio** deberá estarse a lo señalado en el artículo 88 del CFPC, así como a lo dispuesto en el artículo 100 de las DISPOSICIONES REGULATORIAS. Asimismo, deberá entenderse que los documentos emitidos por esta autoridad; así como las páginas de Internet, son **hechos notorios** cuya demostración no requiere mayor discusión ni debate y, por tanto, hacen prueba plena únicamente de que dicha información está publicada en esos términos.²⁷

²⁶ Resulta aplicable la siguiente tesis: “**PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR.** La prueba ‘instrumental de actuaciones’ propriadamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, si una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba en particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son infundados [énfasis añadido]”, Tesis Aislada, 7a, Cuarta Sala, SJF, Volumen 52, Quinta Parte, Pág. 58, Registro: 244101; y “**PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS.** Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos”. Tesis Aislada, 8ª Época, TCC, SJF, Tomo XV; enero de 1995, Pág. 291; Registro: 209572.

²⁷ Al respecto, resultan aplicables, por analogía, las siguientes tesis: “**HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.** Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada ‘internet’, del cual puede obtenerse, por

Confesiones

Varias de las pruebas que se analizan en el presente caso implican una confesión, por lo cual, en términos de los artículos 93, fracción I, y 95 del CFPC, se les confiere el valor probatorio pleno descrito en los artículos 96, 199, 200 y 210 del CFPC, respecto de los hechos que resulten contrarios a los intereses de quienes las presentaron o de sus respectivas representadas. En este aspecto, para evitar repeticiones innecesarias, cuando en esta resolución se indique que se trata de una confesión se entenderá que le corresponde el valor establecido en dichos artículos.

a) Cuestión previa

Respecto de las empresas Servicio Lomas de Vista Hermosa, S.A. de C.V., Servicio Lomas de las Palmas, S.A. de C.V., Servicio Caseta El Dorado, S.A. de C.V., Operadora de Servicios Reforma, S.A. de C.V., (socios iniciales) y B (nuevo socio), me veo imposibilitado de dar contestación en su nombre respecto del presente incidente, ello en virtud de que el representante legal de las referidas empresas ha notificado mediante “Aviso de terminación del convenio emanado del procedimiento de mediación para fijar las condiciones de exclusividad en el suministro de combustibles y franquicias”, celebrado entre estas y G500.

Para acreditar sus manifestaciones, G500 ofreció copia simple de los “Avisos de terminación del convenio emanado del procedimiento de mediación para fijar las condiciones de exclusividad en el suministro de combustibles y franquicias” celebrados entre G500, S.A.P.I. de C.V. y las referidas personas morales.

ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular”. [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, enero de 2009; Pág. 2470; Registro: 168124, y “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo II, noviembre de 2013; Pág. 1373.

Eliminado: seis palabras.

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

Su argumento es **inoperante** por lo que hace a **B**, por partir de premisas falsas o incorrectas²⁸ toda vez que, como se advierte de la RESOLUCIÓN, la cédula de notificación de la RESOLUCIÓN, el ACUERDO DE INICIO y la cédula de notificación del ACUERDO DE INICIO, que constan en el expediente como **documentales públicas**, dicha persona moral no se considera como sujeto obligado para efectos del EXPEDIENTE que se resuelve y, por tanto, no se le imputó ningún probable incumplimiento a las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN.

Por otro lado, en relación a Servicio Lomas de Vista Hermosa, S.A. de C.V., Servicio Lomas de las Palmas, S.A. de C.V., Servicio Caseta El Dorado, S.A. de C.V. y Operadora de Servicios Reforma, S.A. de C.V., se señala lo siguiente:

Del EXPEDIENTE CNT se desprende que el PROMOVENTE fue nombrado representante común de los socios iniciales de G500 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo tercero, 89, fracción II, 121 de la LFCE y 5 del CFPC,²⁹ y que se le otorgó el carácter de autorizado en términos del artículo 111, párrafo segundo, de la LFCE,³⁰ lo que quedó asentado en la RESOLUCIÓN.³¹

De la lectura de los “Avisos de terminación del convenio emanado del procedimiento de mediación para fijar las condiciones de exclusividad en el suministro de combustibles y franquicias” celebrados con G500, S.A.P.I. de C.V., que constituyen **copias simples**, se identifica que:

- El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, la titular de la correduría pública número ochenta y cinco de la hoy Ciudad de México se apersonó en el domicilio de G500, S.A.P.I. de C.V.
- Se identificó con **A** con quien realizó la diligencia.
- Le hizo entrega de los “Avisos de terminación del convenio emanado del procedimiento de mediación para fijar las condiciones de exclusividad en el suministro de combustibles y

²⁸ Resulta aplicable las siguientes tesis de jurisprudencia: “**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO** [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico: de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes [énfasis añadido].” [J]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 14, Enero de 2015; Tomo II; Pág. 1605. XVII.1o.C.T. J/5 (10a.); Registro: 2008226 y “**AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.** [énfasis añadido].” [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012; Tomo 3; Pág. 1326. 2a./J. 108/2012 (10a.); Registro: 2001825.

²⁹ Mediante acuerdo emitido por el ST en el EXPEDIENTE CNT el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, punto de acuerdo Cuarto.

³⁰ *Ibid*, punto de acuerdo Quinto.

³¹ Antecedente Vigésimo. Folios 020 y 121.

franquicias” firmados por los apoderados legales de Servicio Lomas de Vista Hermosa, S.A. de C.V., Servicio Lomas de las Palmas, S.A. de C.V., Servicio Caseta El Dorado, S.A. de C.V. y Operadora de Servicios Reforma, S.A. de C.V.

Estas copias simples tienen valor de un indicio que requiere adminicularse con otras pruebas.

- El ESCRITO I, que consta como **documental privada**, y en el que se advierte que el PROMOVENTE manifestó que dichas personas morales *“manifestaron su deseo de ya no formar parte de G500 y de no proporcionar información, motivo por el cual no se presenta la actualización de información requerida respecto de dichas sociedades.”*³²
- El tercer testimonio de la escritura pública número trescientos veintinueve mil seiscientos treinta y siete, del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, otorgado bajo la fe de la titular de la notaría pública doscientos siete de la Ciudad de México, actuando como asociado y en el protocolo del notario público número diez, que para esta Comisión es un **hecho notorio**³³ al obrar dentro del EXPEDIENTE COND del que deriva el presente incidente. En este documento, el Consejo de Administración de G500, S.A.P.I. de C.V., por unanimidad, resolvió que se reconozca que diversas estaciones de servicio —entre las que se encuentra Servicio Lomas de Vista Hermosa, S.A. de C.V., Servicio Lomas de las Palmas, S.A. de C.V., Servicio Caseta El Dorado, S.A. de C.V. y Operadora de Servicios Reforma, S.A. de C.V.— no están dispuestas a cumplir con la obligación de proporcionar los documentos y datos necesarios para cumplir con lo establecido en el inciso (B) de la Cuarta Consideración de Derecho de la RESOLUCIÓN.

Los documentos anteriores únicamente demuestran las manifestaciones relacionadas con la entrega de información de, entre otras, esas cuatro (4) estaciones de servicio, sin embargo, no son suficientes para acreditar que formalmente dejaron de ser socios de G500 y que, por consiguiente, queden excluidos del cumplimiento de la RESOLUCIÓN.

En efecto, de la lectura de la reforma a los estatutos sociales de G500, S.A.P.I. de C.V. que consta en escritura pública número trescientos veintiocho mil ochocientos diez, del catorce de enero de dos mil diecinueve, otorgado bajo la fe de la titular de la notaría pública doscientos siete de la Ciudad de México actuando como asociado y en el protocolo del notario público número diez

³² Folio 073.

³³ Resulta aplicable la siguiente tesis: **“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN LOS JUICIOS QUE ANTE ESA AUTORIDAD SE TRAMITEN Y TENGA CONOCIMIENTO POR RAZÓN DE SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.** Se considera que constituyen hechos notorios para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aquellos de los cuales tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional, pues al ser los Magistrados integrantes del citado órgano colegiado quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria, en términos del primer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, pueden invocar e introducir el criterio ahí sustentado en diverso juicio fiscal, puesto que si en un justiciable conexo al de que se trate ya se emitió resolución, válidamente puede hacerse notar ese hecho y apoyarse en él, aun cuando las partes no lo hubiesen mencionado, bastando que se tenga a la vista dicha resolución para invocarla, pues es una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercer para resolver una contienda jurisdiccional, máxime si una de las partes lo señaló como prueba, pues en ese caso menos aún puede soslayarse su examen [énfasis añadido]”. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVI, Agosto de 2002; Pág. 1301. V.3o.15 A; Registro: 186250.

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

dentro del EXPEDIENTE COND, que se valora como **documental pública**, no se advierte que se prevea como causal de exclusión de socios o separación de G500, S.A.P.I. de C.V. la negativa de entrega de la información actualizada del valor anual de ventas (en pesos mexicanos) de (i) cada uno de los tipos de gasolina y diésel [y el volumen anual de ventas (en litros)]; (ii) aceites, aditivos, anticongelantes y otros productos automotrices ("productos automotrices"); y (iii) de productos de otra índole (alimentos, bebidas y productos de consumo); así como la información concerniente a los proveedores de combustible y de los servicios de logística que conforme a la RESOLUCIÓN están obligados a presentar G500, S.A.P.I. de C.V., los socios iniciales, así como eventualmente los socios potenciales que estén incorporados a G500, S.A.P.I. de C.V. a más tardar los treinta de enero de cada año.

Por tal motivo, se informa que la manifestación del PROMOVENTE en el sentido de que no puede dar contestación en nombre de Servicio Lomas de Vista Hermosa, S.A. de C.V., Servicio Lomas de las Palmas, S.A. de C.V., Servicio Caseta El Dorado, S.A. de C.V. y Operadora de Servicios Reforma, S.A. de C.V., no tiene el alcance que pretende pues, como se advierte de la adminiculación de los elementos de convicción identificados con anterioridad, tanto el nombramiento del representante común como de los autorizados continúa vigente.

En ese sentido, se tendrán por ciertos los hechos respecto de los cuales no se haga manifestación alguna salvo prueba en contrario, como consecuencia de no dar contestación en nombre de las personas morales referidas en el presente incidente, conforme al artículo 83, fracción I, segundo párrafo, y 121 de la LFCE; así como 329 del CFPC.

No obstante, la participación de estas empresas será evaluada en el apartado IV. *Acreditación del incumplimiento de condiciones.*

b) Argumentos dirigidos a combatir la presentación extemporánea del informe anual

Teniendo en cuenta (i) el plazo de 30 de enero de cada año, que se estableció en la Cuarta Consideración de Derecho inciso B sub incisos a) y b) de la RESOLUCIÓN para presentar el informe anual de los socios iniciales y de los nuevos socios incorporados a G500; y (ii) el cúmulo de información a revisar toda vez que se incrementó en más del 100% al haberse incorporado **B** nuevos socios en el año de 2018, comencé a recabar la información a principios de enero de 2019 a efecto de presentar en debido tiempo y forma la información en comento.

El 30 de enero de 2019, me dispuse a enviar la promoción electrónica a través del SITEC de la COFECE aproximadamente a las 23:30 P.M., a efecto de dar cumplimiento en el plazo establecido en la RESOLUCIÓN; sin embargo, no me fue posible realizar el envío electrónico de la promoción con éxito dado que en mis oficinas se presentó un problema de conexión de Internet, mismo que no se resolvió sino hasta el día 1 de febrero de 2019.

Atendiendo a la imposibilidad que tuve de presentar la promoción electrónica el 30 de enero de 2019 y con la única finalidad y ánimo de dar cumplimiento a la

Eliminado: una palabra.



1435
Pleno
RESOLUCIÓN

G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

RESOLUCIÓN, el 31 de enero de 2019 presenté la promoción en la OFICIALÍA a la que se le asignó el número 143463.

En este sentido, solicito a la COFECE que para determinar las consecuencias que pudieran derivar del incumplimiento de carácter formal, se atienda al principio jurídico de que "nadie está obligado a lo imposible" y con base en ello determine que me era imposible presentar la información el 30 de enero de 2019, ello en virtud de las vicisitudes que enfrenté el 30 de enero de 2019, al tratar de presentar promoción electrónica dentro del SITEC de la COFECE y verme imposibilitado a realizarlo, dado la falla en la Conexión de Internet que presenté en mis oficinas y en las horas en que se presentó.

La presentación de la promoción el 31 de enero de 2019 a través del cual se cumple lo establecido en la RESOLUCIÓN obedeció a causas fortuitas totalmente ajenas a mi voluntad. No fue posible presentar el informe anual el 30 de enero de 2019, debido a los problemas técnicos que enfrenté de la conexión de Internet, lo que me imposibilitó física y materialmente para presentar la promoción electrónica en la referida fecha.

El 26 de febrero de 2019, ante el cúmulo de información que se generó en el 2018 debido a la integración de nuevos socios a G500, en alcance a la promoción que precede, ingresé una promoción en la OFICIALÍA, a la que se le asignó el número 143912, a través de la cual exhibí un segundo bloque de información con la finalidad satisfacer lo establecido en la RESOLUCIÓN.

El 29 de marzo de 2019, ante el cúmulo de información que se generó en el 2018 debido a la integración de los nuevos socios a G500, en alcance a las promociones que preceden, ingresé una tercera promoción en la OFICIALÍA, a la que se le asignó el número 144717, a través de la cual exhibí un tercer bloque de información con la finalidad satisfacer lo establecido en la RESOLUCIÓN.

En cumplimiento a la RESOLUCIÓN y en específico a la Cuarta Consideración de Derecho inciso B sub incisos a) y b), presenté en la OFICIALÍA, promociones en fechas 31 de enero, 26 de febrero y 29 de marzo del presente año, mediante las cuales presenté información actualizada de los socios iniciales y de los nuevos socios, respecto del (i) el volumen anual de ventas (en litros) y el valor anual de ventas (en pesos mexicanos), de cada uno de los tipos de gasolina y diésel que ofreció el año anterior al informe; (ii) el valor anual de las ventas (en pesos mexicanos) de aceites, aditivos, anticongelantes y otros productos automotrices ("productos automotrices"), para el año anterior al informe; (iii) el valor anual de ventas (en pesos mexicanos) de productos de otra índole (i.e alimentos, bebidas y productos de consumo), para el año anterior al informe y (iv) información concerniente a los proveedores de combustible y de los servicios logística.

Toda vez que ya exhibí y presenté la información actualizada a la que se hace referencia la Cuarta Consideración de Derecho inciso B) sub incisos a) y b) de la

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

RESOLUCIÓN, tanto de los socios iniciales, como de los nuevos socios de G500 he dado cumplimiento con la misma.

En virtud de ello, solicito a esa Comisión, considere que en la especie no existe incumplimiento y, en consecuencia, no es procedente la imposición de una sanción en términos de lo que dispone el artículo 127, fracciones II y IX, de la LFCE.

G500 afirma que al haber presentado la información actualizada del informe anual el treinta y uno de enero, el veintiséis de febrero y el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve en la OFICIALÍA no existe incumplimiento y, en consecuencia, no es procedente la imposición de una sanción en términos del artículo 127, fracciones II y IX, de la LFCE.

Este argumento es **infundado** por las siguientes razones:

En el EXPEDIENTE constan como **documental pública** (i) la RESOLUCIÓN que establece que el informe anual se debe presentar a más tardar los días treinta de enero de cada año y (ii) la cédula de notificación de la RESOLUCIÓN que acredita que G500 tuvo conocimiento de las obligaciones contenidas en la RESOLUCIÓN desde que le fue notificada; y como **documental privada** (iii) el ESCRITO DE ACEPTACIÓN en que G500 aceptó de forma incondicional y total las condiciones expuestas en la Consideración de Derecho Cuarta de la RESOLUCIÓN para los efectos legales a que haya lugar.

De los elementos anteriores se concluye que, al menos a partir de la fecha del ESCRITO DE ACEPTACIÓN G500 tuvo pleno conocimiento que a más tardar los treinta de enero de cada año; tendría que presentar la información actualizada de:

- El valor anual de ventas (en pesos mexicanos) de (i) cada uno de los tipos de gasolina y diésel [y el volumen anual de ventas (en litros)]; (ii) aceites, aditivos, anticongelantes y otros productos automotrices (“productos automotrices”); y (iii) de productos de otra índole (alimentos, bebidas y productos de consumo); así como la información concerniente a los proveedores de combustible y de los servicios de logística;
- De G500, S.A.P.I. de C.V., los socios iniciales, así como eventualmente los socios potenciales que estén incorporados a G500, S.A.P.I. de C.V.

Aunado a lo anterior se advierte que en el ESCRITO DE MANIFESTACIONES G500 afirma que el plazo que se estableció en la Cuarta Consideración de Derecho inciso B sub incisos a) y b) de la RESOLUCIÓN para presentar el informe anual de los socios iniciales y de los nuevos socios incorporados a G500 es el treinta de enero de cada año.³⁴ Dicha afirmación consta como **confesión** y hace prueba plena en su contra.

³⁴ Folios 093, 094, 102 y 103.



1437

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

En ese sentido, consta como **documental privada** el ESCRITO I, del que se advierte que se presentó el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, con lo cual, se acredita el incumplimiento de la presentación del informe anual en el plazo establecido en la RESOLUCIÓN.

Lo anterior acredita que las actuaciones de G500 fueron realizadas en los términos descritos por el ST en el ACUERDO DE INICIO del EXPEDIENTE; esto es, un día después del plazo establecido en la RESOLUCIÓN.

En ese sentido, no basta afirmar que sí entregó la información para concluir que no existe incumplimiento, más aún cuando el PROMOVENTE reconoce que no fue presentada dentro del plazo legal establecido en la RESOLUCIÓN.

No obstante, el hecho de que la información finalmente fue entregada será tomado en cuenta por el PLENO de esta COMISIÓN en el apartado titulado "SANCIÓN" de la presente resolución, al evaluar los elementos para la imposición de multas de conformidad con el artículo 130 de la LFCE.

Por otro lado, G500 alega que ante el cúmulo de información al haberse incorporado **B** **B** nuevos socios en el dos mil dieciocho, comenzó a recabar la información a principios de enero de dos mil diecinueve, a efecto de presentar en debido tiempo y forma la información que pretendía enviar de forma electrónica a través del SITEC de la COFECE el treinta de enero de dos mil diecinueve aproximadamente a las veintitrés horas con treinta minutos; sin embargo, presentó un problema de conexión de internet que se resolvió hasta el uno de febrero de dos mil dieciocho [sic].

En ese sentido alega que derivado de las fallas técnicas que tuvo con la conexión de internet, le fue imposible presentar la información el treinta de enero de dos mil diecinueve, por lo que solicita que no se le imponga multa atendiendo al principio de que "nadie está obligado a lo imposible".

Previo al análisis de este argumento se aclara que, si bien el SITEC es el Sistema de Trámites Electrónicos de la Comisión establecido a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar cualquiera de los procedimientos que hayan sido autorizados previamente por el Pleno;³⁵ para el trámite de verificación del cumplimiento de condiciones y del incidente a que hace referencia el artículo 121, último párrafo, de las DRLFCE, expresamente se estableció que serán tramitados por la vía de medios tradicionales en un expediente físico y que los Agentes Económicos deberán presentar la información con la que pretendan acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución en la OFICIALÍA.

Luego entonces, rige para estos procedimientos lo establecido en el artículo 116 de la LFCE, que establece que todas las promociones deben presentarse ante la Oficialía de Partes de la COFECE,

³⁵ De acuerdo con los artículos 3, 4, fracción XXIX de las Disposiciones Regulatorias sobre el Uso de Medios Electrónicos de la COFECE, así como 22 y 23 de los Lineamientos para la notificación de concentraciones por medios electrónicos ante la COFECE. Ambos instrumentos normativos publicados en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete.

Uuy 21 9



1438

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

y que se pueden presentar promociones el día de su vencimiento después de concluido el horario en que la oficialía de partes debe recibir documentos, por transmisión electrónica, a las direcciones de correo electrónico que para tal efecto sean publicadas. En consecuencia, no es a través del SITEC que se debe presentar información para cumplir con la RESOLUCIÓN, sino a través de los correos electrónicos publicados en el portal de Internet de la Comisión.

Independientemente de la confusión en la que incurre el PROMOVENTE, como se afirmó con anterioridad, en el EXPEDIENTE constan como **documental pública** la RESOLUCIÓN y la cédula de notificación de la RESOLUCIÓN; y como **documental privada** el ESCRITO DE ACEPTACIÓN que acredita que G500 tuvo pleno conocimiento de las obligaciones que contraía por lo que si bien es cierto que en el transcurso del dos mil dieciocho hubo un incremento de socios, lo cierto es que de la naturaleza de la instrumental de actuaciones como **documental pública y privada** se advierte que desde la presentación del escrito inicial de notificación el nueve de junio de dos mil dieciséis en el EXPEDIENTE CNT se informó a esta COFECE que como segundo momento de la operación se tenía la intención de incorporar socios *“con el objetivo de alcanzar un número de hasta [REDACTED] socios accionistas”*.³⁶

En ese sentido, no tiene aplicación el principio al que recurre G500; es decir, “nadie está obligado a lo imposible” pues desde que inició el procedimiento de notificación de concentraciones en el EXPEDIENTE CNT se tenía la intención de incorporar a un número de socios mayor al que se incorporó en el dos mil dieciocho, y el incumplimiento de G500 en la fecha establecida en la RESOLUCIÓN evidencia al menos un actuar negligente o una violación al deber objetivo de cuidado al haber aceptado en el ESCRITO DE ACEPTACIÓN la RESOLUCIÓN en todos sus términos incluso frente a una eventual incorporación numerosa de socios, por lo que se estima que G500 debió tomar las diligencias necesarias para cumplir lo establecido en la RESOLUCIÓN.

Por tanto, es **infundado** su argumento toda vez que no se acreditó la imposibilidad que afirma.

Aunado a lo anterior, G500 alega que el treinta de enero de dos mil diecinueve, aproximadamente a las veintitrés horas con treinta minutos pretendía enviar de forma electrónica a través del SITEC de la COFECE la información solicitada en la RESOLUCIÓN; sin embargo, presentó un problema de conexión de internet que se resolvió hasta el día uno de febrero.

En ese sentido recurre al mismo principio y alega que “nadie está obligado a lo imposible” por lo que derivado de las fallas técnicas que tuvo con la conexión de internet le fue imposible presentar la información el treinta de enero de dos mil diecinueve.

En el EXPEDIENTE consta **la copia simple o impresión** del correo electrónico a través del cual se informa al PROMOVENTE, en la noche del treinta de enero de dos mil diecinueve, que se interrumpe el servicio de red de la oficina por cuestiones del “carrier” de internet y cableado, y con el cual se pretende acreditar que la circunstancia referida aconteció en los términos que alega G500.

³⁶ Folio 014 del EXPEDIENTE CNT.

1439
Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

No obstante, la copia simple o impresión del correo electrónico antes mencionado, al no cumplir con los requisitos que establece el artículo 217 del CFPC para constituir prueba plena, se deben adminicular con otros elementos del EXPEDIENTE, a fin de que se confirme la veracidad de la información en él contenida, razón por la cual constituye un mero indicio, salvo que resulte contrario a los intereses de quien lo presentó.

Además, dicho medio probatorio no tiene el alcance de justificar el incumplimiento de condiciones conforme a lo establecido en la RESOLUCIÓN ni de acreditar que “era imposible” transmitir la información vía correo en términos del artículo 116 de la LFCE, o que el incumplimiento deriva de un caso fortuito.

Aunado a esto, G500 estaba obligado a actuar con la debida diligencia, y no se considera que la falla técnica con la conexión de internet sea un hecho insuperable, imprevisible, o que previniéndose no se pueda evitar.³⁷

³⁷ Resultan aplicables la siguientes tesis aisladas: “ASEGURAMIENTO DE UNA EMPRESA POR PARTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. **NO PUEDE CONSIDERARSE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PARA EFECTOS DE LIBERAR AL CONTRIBUYENTE DE SU OBLIGACIÓN DE PAGAR LOS IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN DERIVADOS DE UNA VISITA DOMICILIARIA, PERO SÍ DE LOS RECARGOS Y MULTAS.** De acuerdo con la doctrina civil, la conducta de una persona que no se realiza conforme a un deber jurídico stricto sensu, o a una obligación lato sensu, es un hecho ilícito que descansa en la idea de culpa y crea a su cargo un derecho personal o de crédito indemnizatorio; sin embargo, hay ocasiones en que se produce una conducta objetivamente igual a la de un hecho ilícito, es decir, se causa un daño, pero la ley considera que su autor no queda responsabilizado por el siniestro, como acontece, en el caso fortuito o fuerza mayor, considerado por la propia doctrina como un fenómeno de la naturaleza, o un hecho de personas con autoridad pública, general -salvo caso excepcional- insuperable, imprevisible, o que previniéndose no se puede evitar, y que origina que una persona realice una conducta dañosa, contraria a un deber jurídico stricto sensu o a una obligación lato sensu. En este sentido, aun cuando derivado de la comisión de un delito, se decreta el aseguramiento de una empresa por la Procuraduría General de la República, y mantenido por el Juez de la causa penal, designando para ello un depositario administrador, en tanto que su representante legal se encuentra privado de la libertad, tal circunstancia no constituye una causa de fuerza mayor que impida al contribuyente cumplir con la obligación de pagar los impuestos con su respectiva actualización, determinados con motivo de una visita domiciliaria, pues si bien, sus órganos de administración fueron sustituidos por el depositario administrador designado por la procuraduría, la impetrante pudo cumplir con esa obligación tributaria por conducto del citado administrador, quien por el lapso que duró dicha medida tuvo su representación legal, y debía cumplir cabalmente con las obligaciones tributarias generadas durante su administración. Así, sin prejuzgar sobre la responsabilidad en que pudo haber incurrido dicho administrador por no haber efectuado el pago de los correspondientes impuestos determinados por la autoridad fiscal; lo cierto es, que al no haberse limitado por autoridad alguna el objeto social de la empresa o de sus actividades, el aseguramiento decretado no la exime de la obligación de pagar sus impuestos; sin embargo, no acontece lo mismo en el caso de los recargos y las multas derivados del incumplimiento en el pago de los impuestos, pues sobre éstos si se actualiza una causa de fuerza mayor que exime al gobernado de la responsabilidad de cubrirlos, dada la naturaleza indemnizatoria de los recargos y sancionatoria de las multas, pues tienen como origen un hecho ilícito realizado por el contribuyente que causó un daño al fisco federal, por no pagar oportunamente los impuestos (en el caso de los recargos), o bien, tratándose de las multas al haber cometido una infracción a las disposiciones fiscales por omitir su pago. Es decir, dichos accesorios no derivan directamente de su obligación tributaria, sino del hecho de haber incurrido en mora en el cumplimiento de esa obligación, el cual no pudo evitar al haberse sustituido sus órganos de administración en virtud del aseguramiento a que estuvo sujeto, lo que constituye una causa de fuerza mayor que lo libera de la responsabilidad de resarcir al fisco federal, por ser un acto de autoridad pública, insuperable, imprevisible e inevitable que se prolongó durante el lapso en que se generó la obligación incumplida y que permaneció durante la realización de la visita domiciliaria [énfasis añadido].” [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de 2005; Pág. 1416. I.8o.A.58 A; Registro: 177368 y “CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. CUANDO EL ACTO O HECHO EN QUE SE SUSTENTA ES UN ACTO DE AUTORIDAD. La doctrina jurídica es unánime al admitir que existen ocasiones en que el incumplimiento de una obligación no puede ser imputable al deudor, porque éste se ve impedido a cumplir

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

En efecto, en este caso no se le puede eximir a G500 el deber de diligencia y debido cuidado con que debió regir su actuar tomando las prevenciones correspondientes para evitar el incumplimiento de los plazos establecidos en la RESOLUCIÓN.

En ese sentido, se califica su argumento como **infundado** toda vez que la falla técnica que presentó con su conexión de internet no constituye una justificación legítima que la exima de asumir su responsabilidad por el incumplimiento de la RESOLUCIÓN máxime que, como se desarrolló con anterioridad, la presentación del informe anual no es el treinta de enero de cada año sino hasta el treinta de enero. Es decir, no se tiene un día específico para su entrega sino un plazo y término para el cumplimiento de dicha obligación que fue de su conocimiento desde la notificación de la RESOLUCIÓN, esto es desde el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, y que fue aceptada de forma incondicional el tres de abril de dos mil diecisiete con todas sus consecuencias mediante el ESCRITO DE ACEPTACIÓN que constan como **documental pública** y como **documental privada**.

c) Argumentos dirigidos a la motivación de los elementos de análisis para la imposición de multas

Ahora bien, cabe señalar que el posible incumplimiento en el que pudiera incurrir podría obedecer a una mera cuestión de forma, más no de fondo, dado que el mismo estriba en que se excedió en el plazo de presentación de la información actualizada de los socios iniciales y de los nuevos socios de G500 al haber sido presentada un poco más de 7 horas hábiles después del plazo establecido.

Asimismo, cabe señalar que mi representada se encuentra recabando la información complementaria solicitada por la COFECE mediante acuerdo de 29 de abril de 2019, a efecto de que tenga por satisfecho el cumplimiento de la Cuarta Consideración de Derecho inciso B) sub incisos a) y b) de la RESOLUCIÓN.

No hubo en forma alguna una intencionalidad de incumplir con los establecido la RESOLUCIÓN sino que, por el contrario, ante el cúmulo de información que se

por causa de un acontecimiento que está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido prever o que aun previéndolo no ha podido evitar. A un acontecimiento de esa naturaleza se le llama caso fortuito o fuerza mayor. Los diversos tratadistas como Bonnecase, García Goyena, Henri León Mazeaud y André Tunc también son acordes al distinguir tres categorías de acontecimientos constitutivos del caso fortuito o de fuerza mayor, según provengan de sucesos de la naturaleza, de hechos del hombre o de actos de la autoridad; sea que el acontecimiento proceda de cualquiera de esas fuentes y, por ello, provoque la imposibilidad física del deudor para cumplir la obligación, lo que traerá como lógica consecuencia que no incurra en mora y no pueda considerársele culpable de la falta de cumplimiento con la correspondiente responsabilidad de índole civil, dado que a lo imposible nadie está obligado. Las características principales de esta causa de inimputabilidad para el deudor son la imprevisibilidad y la generalidad, puesto que cuando el hecho puede ser previsto el deudor debe tomar las prevenciones correspondientes para evitarlo y si no lo hace así, no hay caso fortuito o fuerza mayor; el carácter de generalidad implica que la ejecución del hecho sea imposible de realizar para cualquier persona, no basta, pues, con que la ejecución sea más difícil, más onerosa o de desequilibrio en las prestaciones recíprocas. Así, cuando se trata de actos de autoridad, que algunos autores como Manuel Borja Soriano catalogan dentro de la categoría de hechos provenientes del hombre, el hecho del príncipe, se da a entender a todos aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emana de la autoridad pública [énfasis añadido].” [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo VII, Enero de 1998; Pág. 1069. II.1o.C.158 C; Registro: 197162.

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

generó en virtud de la incorporación de un gran número de nuevos socios al grupo, me he esforzado y he tratado en todo momento de satisfacer la referida consideración de derecho, ello a través de las promociones de fechas 31 de enero, 26 de febrero y 29 de marzo del presente año y la información adjunta a las mismas.

No existió ni existe gravedad por presentar la información actualizada 7 horas hábiles después del plazo señalado en la RESOLUCIÓN, puesto que dicho incumplimiento es meramente de carácter formal, no afecta en ninguna forma el sistema de cumplimiento de la RESOLUCIÓN ni afecta o causa daño al proceso de competencia económica.

La totalidad de los actuales y potenciales accionistas de G500 son pequeños empresarios o grupos familiares que por sí solos carecen de recursos y a través de la concentración buscan formar un grupo de compras de estaciones de servicio que permita a los miembros de G500 lograr una mejor capacidad de negociación y economías de escala respecto a la compra de combustibles y otros productos y buscar eficiencias potenciales en la logística de compra, transporte y almacenamiento de tales bienes.

El incumplimiento en el que posiblemente incurrí tiene el carácter formal y no es derivado de ningún incumplimiento a alguna condición, ni resolutive de la RESOLUCIÓN y en virtud de ello no sancionable en términos de lo dispuesto en el artículo 127, fracciones II y IX, de la LFCE.

Asimismo, solicito a la COFECE que tome en consideración que desde el momento en que notifiqué la concentración y a la fecha, he cumplido en tiempo y forma y a cabalidad con las condiciones y obligaciones establecidas en la RESOLUCIÓN, así como con cada uno de los requerimientos formulados por dicha autoridad.

Por tanto, en atención a lo anterior, solicito a la COFECE que aplique una medida apremio y no una sanción.

Estos argumentos se califican como inoperantes porque no combaten la imputación contenida en el ACUERDO DE INICIO relativa a que, en relación con la segunda obligación contenida en la RESOLUCIÓN, se advertía que el PROMOVENTE presentó el ESCRITO I el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve; esto es, fuera del plazo establecido en la RESOLUCIÓN.³⁸

³⁸ Resultan aplicables las siguientes tesis: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

No obstante, las circunstancias de duración, daño al proceso de competencia económica e intencionalidad serán consideradas por este PLENO en la sección titulada "SANCIÓN" de la presente resolución, al evaluar los elementos para la imposición de multas de conformidad con el artículo 130 de la LFCE.

Asimismo, en relación con la solicitud de G500 relativa a aplicar una medida de apremio conforme a al artículo 126 de la LFCE, se señala que su argumento es **infundado** toda vez que el incumplimiento analizado en la presente resolución ha sido acreditado en los términos previamente referidos y el resolutivo "Tercero" de la RESOLUCIÓN establece que:

"[...] En caso del incumplimiento de las condiciones, se tramitará el incidente correspondiente en términos de los artículos 132 y 133 de la LFCE y se sancionará conforme a lo dispuesto por el artículo 127, fracción IX y, en su caso, en términos de la fracción II del artículo 127 del mismo ordenamiento. [Énfasis añadido]".

IV. ACREDITACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES

Conforme a lo señalado, se acredita el incumplimiento de la presentación del informe anual en el plazo establecido en la RESOLUCIÓN, toda vez que G500 manifiesta que tenía conocimiento que el plazo para la entrega del informe anual era el treinta de enero y en el EXPEDIENTE consta la presentación del ESCRITO I el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve.

En ese sentido, no basta afirmar que sí entregó la información para concluir que no existe incumplimiento, más aún cuando el PROMOVENTE reconoce que no fue presentada dentro del plazo legal establecido en la RESOLUCIÓN.

G500 debió tomar las diligencias necesarias para cumplir lo establecido en la RESOLUCIÓN y el

que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable [énfasis añadido]" [J]; 6a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; Volumen CXXVI, Cuarta Parte; Pág. 27; Registro: 269435 y "**CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, POR NO COMBATIR LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si los argumentos expuestos por el solicitante de garantías, no contienen ningún razonamiento jurídico concreto tendiente a combatir los fundamentos primordiales en que se apoyó la responsable para emitir la sentencia reclamada** que sirva para poner de manifiesto ante la potestad federal que dichos fundamentos del fallo de que se duele sean contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, bien porque siendo aplicable determinado precepto no se aplicó, bien porque se aplicó sin ser aplicable, bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, o bien porque la sentencia no se apoyó en principios generales de derecho si no hubiese ley que normara el negocio; **procede determinar que los conceptos de violación expuestos en tales circunstancias, son inoperantes** [énfasis añadido]". [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIX, Febrero de 2004; Pág. 1032. II.2o.A.45 A; Registro: 182226; y iii) "**CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, POR NO COMBATIR LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si los argumentos expuestos por el solicitante de garantías, no contienen ningún razonamiento jurídico concreto tendiente a combatir los fundamentos primordiales en que se apoyó la responsable para emitir la sentencia reclamada** que sirva para poner de manifiesto ante la potestad federal que dichos fundamentos del fallo de que se duele sean contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, bien porque siendo aplicable determinado precepto no se aplicó, bien porque se aplicó sin ser aplicable, bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, o bien porque la sentencia no se apoyó en principios generales de derecho si no hubiese ley que normara el negocio; **procede determinar que los conceptos de violación expuestos en tales circunstancias, son inoperantes** [énfasis añadido]". [TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989; Pág. 163; Registro: 226819.

no hacerlo evidencia al menos un actuar negligente o una violación al deber objetivo de cuidado. No obstante, se advierte que el incumplimiento duró poco tiempo, debido a que la entrega de la información se realizó al día siguiente; lo que será tomado en consideración al momento de imponer la sanción que corresponda.

Adicionalmente, si bien en el apartado “III. Manifestaciones” se señaló que los “Avisos de terminación del convenio emanado del procedimiento de mediación para fijar las condiciones de exclusividad en el suministro de combustibles y franquicias”, no eran suficientes para acreditar que formalmente dejaron de ser socios de G500 y que, por consiguiente, queden excluidos del cumplimiento de la RESOLUCIÓN, de la administración de los elementos y circunstancias señaladas en dicho apartado³⁹ y las constancias que obran en el EXPEDIENTE se advierte que, en efecto existió una imposibilidad para entregar la información actualizada relativa al valor anual de ventas (en pesos mexicanos) de (i) cada uno de los tipos de gasolina y diésel [y el volumen anual de ventas (en litros)]; (ii) aceites, aditivos, anticongelantes y otros productos automotrices (“productos automotrices”); y (iii) de productos de otra índole (alimentos, bebidas y productos de consumo); así como la información concerniente a los proveedores de combustible y de los servicios de logística de Servicio Lomas de Vista Hermosa, S.A. de C.V., Servicio Lomas de las Palmas, S.A. de C.V., Servicio Caseta El Dorado, S.A. de C.V., y Operadora de Servicios Reforma, S.A. de C.V., para del año dos mil dieciocho.

Lo anterior, dado que además de los avisos referidos en el párrafo anterior, de la reforma a los estatutos sociales de G500, S.A.P.I. de C.V. que consta en escritura pública número trescientos veintiocho mil ochocientos diez, del catorce de enero de dos mil diecinueve, otorgado bajo la fe de la titular de la notaría pública doscientos siete de la Ciudad de México actuando como asociado y en el protocolo del notario público número diez dentro del EXPEDIENTE COND se advierten las causales de exclusión de socios entre las que destaca la siguiente:

B

[...]

³⁹ A saber, el ESCRITO I, los “Avisos de terminación del convenio emanado del procedimiento de mediación para fijar las condiciones de exclusividad en el suministro de combustibles y franquicias”, el tercer testimonio de la escritura pública número trescientos veintinueve mil seiscientos treinta y siete, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, otorgado bajo la fe de la titular de la notaría pública doscientos siete de la Ciudad de México, actuando como asociado y en el protocolo del notario público número diez en que el Consejo de Administración de G500, S.A.P.I. de C.V., por unanimidad, resolvió que se reconozca que diversas estaciones de servicio —entre las que se encuentra Servicio Lomas de Vista Hermosa, S.A. de C.V., Servicio Lomas de las Palmas, S.A. de C.V., Servicio Caseta El Dorado, S.A. de C.V. y Operadora de Servicios Reforma, S.A. de C.V.— no están dispuestas a cumplir con la obligación de proporcionar los documentos y datos necesarios para cumplir con lo establecido en el inciso (B) de la Cuarta Consideración de Derecho de la RESOLUCIÓN y la reforma a los estatutos sociales de G500, S.A.P.I. de C.V. que consta en escritura pública número trescientos veintiocho mil ochocientos diez, de fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, otorgado bajo la fe la titular de la notaría pública doscientos siete de la Ciudad de México actuando como asociado y en el protocolo del notario público número diez dentro del EXPEDIENTE COND.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

B

[...]"

En consecuencia, les fue imposible presentar la información a la que hace referencia el inciso (b) de la Cuarta Consideración de Derecho de la RESOLUCIÓN, con posterioridad a la fecha en que notificaron su intención de separarse de G500, por lo que no pueden ser sancionadas por la presentación extemporánea de la información correspondiente a otras estaciones de servicio.

V. ALEGATOS

Mediante escrito de diecisiete de junio de dos mil diecinueve G500 presentó el escrito por el cual emitió sus alegatos en que expuso sustancialmente los mismos argumentos contenidos en su ESCRITO DE MANIFESTACIONES.

Los alegatos tienen por objeto que los agentes económicos con interés jurídico expongan las razones de hecho y de derecho en defensa de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho.⁴⁰

Por tanto, si en vía de alegatos G500 expuso medularmente los mismos argumentos contenidos en su ESCRITO DE MANIFESTACIONES, en virtud de que dichos argumentos ya fueron atendidos en esta resolución y no modifican las conclusiones a las que se llegó, téngase por aquí reproducidas las consideraciones correspondientes a fin de evitar repeticiones innecesarias.⁴¹

⁴⁰ Resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: "**ALEGATOS DE BIEN PROBADADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU CONCEPTO, SIGNIFICADO Y CONFIGURACIÓN.** En todo procedimiento existen, generalmente, dos etapas perfectamente diferenciables: la de instrucción (que abarca todos los actos procesales) y la de conclusión o resolución; dividiéndose a su vez la instrucción en tres fases: postulatoria o expositiva (que permite instruir al juzgador en la litis a debate), probatoria (que tiene la finalidad de llegar al conocimiento objetivo de la controversia mediante los elementos que ofrecen las partes para acreditar sus posiciones contrapuestas, fase que cuenta con sus estadios de ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo) y preconclusiva, integrada por los alegatos o conclusiones de las partes. En ese orden de ideas, se advierte, aunque sea de una manera muy general, que los alegatos son las argumentaciones verbales o escritas que formulan las partes una vez concluidas las fases postulatoria y aprobatoria; en una acepción general, se traduce en el acto realizado por cualquiera de las partes mediante el cual se exponen las razones de hecho y de derecho en defensa de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho y no así los argumentos y probanzas de su contraparte. En este sentido, alegar de bien probado significa el derecho que asiste a cada parte en juicio para que en el momento oportuno recapitule en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio. Así, la exposición de alegatos en el juicio contencioso administrativo, no tiene una forma determinada en las leyes procesales, pero debe tenerse en cuenta que se configura con la exposición metódica y razonada de los hechos afirmados en la demanda, las pruebas aportadas para demostrarlos, el valor de esas pruebas, la impugnación de las pruebas aportadas por el contrario, la negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se extraen de los hechos probados, y las razones legales y doctrinarias que se aducen a favor del derecho invocado. [Énfasis añadido]"; [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Abril de 2007; Pág. 1341. I.7o.A. J/37; Registro: 172838.

⁴¹ Resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: "**ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR**

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

Por otro lado, G500 solicita a esta COFECE que tenga como hecho notorio el acuerdo emitido por el Director General de Concentraciones el once de junio de dos mil diecinueve y publicado por lista el catorce del mismo mes y año en el EXPEDIENTE COND, mediante el cual se tuvo por cumplida la obligación de presentar el reporte de dos mil dieciocho. G500 estima que debe tomarse en cuenta como un esfuerzo para cumplir con su obligación de presentar el reporte las cinco (5) promociones posteriores al treinta de enero de dos mil diecinueve.

Al respecto se informa que, si bien el acuerdo referido se tiene como un **hecho notorio** para esta COMISIÓN, lo cierto es que el hecho de que haya presentado la información mediante promociones posteriores a la fecha en la que debía hacerlo, no es una situación que atenúe la omisión de cumplir con su obligación de presentar el reporte el día establecido en la RESOLUCIÓN.

VI. SANCIÓN

Una vez acreditado el incumplimiento de condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN, resulta procedente imponer e individualizar las sanciones que corresponden a los agentes económicos responsables en términos del artículo 127, fracción IX, de la LFCE, que establece que la COFECE puede aplicar como sanción una *“Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente Económico, por haber incumplido con las condiciones fijadas en la resolución de una concentración, sin perjuicio de ordenar la desconcentración.”*

El proceso de notificación de concentraciones es un instrumento de carácter preventivo para evitar que éstas pongan en riesgo el proceso de competencia y libre concurrencia. Esta misma finalidad es la que da origen a la facultad de esta COFECE de imponer condiciones cuando se considera que realizar la operación notificada en los términos planteados implicaría riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia. Las condiciones pueden o no ser aceptadas por los notificantes y, en la especie, G500 aceptó las condiciones impuestas por la COFECE en la RESOLUCIÓN con el objeto de evitar la actualización de un riesgo a la competencia económica y

ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitirseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, si resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial [énfasis añadido]. Jurisprudencia P./J. 26/2018 (10a.); 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 60, noviembre de 2018; Tomo I; Pág. 5; Registro 2018276.

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

la libre concurrencia en los mercados. No obstante, G500 incumplió posteriormente con el plazo para cumplir con una de esas condiciones.

Atendiendo al principio de proporcionalidad,⁴² el PLENO de la COFECE considera los siguientes elementos:

- a) La finalidad de la sanción establecida en el artículo 127, fracción IX, de la LFCE es fundamentalmente disuasiva, ya que busca inhibir la comisión de conductas ilegales, no sólo aquéllas que puedan generar directamente riesgos al proceso de competencia o lesionar las condiciones de competencia y la libre concurrencia, sino también por incumplir con las condiciones fijadas y aceptadas en la resolución de concentración;⁴³

⁴² Resultan aplicables por analogía los siguientes criterios: **"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 81, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002 EN EL ÁMBITO FEDERAL, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. Conforme al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sanciones aplicables a los servidores públicos que por actos u omisiones incurran en alguna responsabilidad administrativa consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, las cuales deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados. Así, el citado precepto consagra el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones al establecer una variedad de éstas para que la autoridad sancionadora, tomando en consideración la responsabilidad, circunstancias del servidor público y sus antecedentes, entre otros aspectos, imponga la sanción correspondiente, es decir, señala que deben tomarse en cuenta diversas circunstancias a efecto de su individualización. En congruencia con lo anterior, se concluye que el artículo 81 último párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente hasta el 13 de marzo de 2002 en el ámbito federal, al establecer que para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración de situación patrimonial dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del encargo, se inhabilitará al infractor por 1 año, viola el indicado principio, ya que constriñe a la autoridad administrativa a imponer siempre la misma sanción, sin importar la gravedad de la responsabilidad en que se incurrió, las circunstancias socioeconómicas del servidor público, su nivel jerárquico y antigüedad, las condiciones exteriores, medios de ejecución y reincidencia, es decir, a todos los servidores públicos se les aplicará invariable e inflexiblemente la sanción especificada, lo cual impide el ejercicio de la facultad prudente del arbitrio para individualizar y cuantificar la temporalidad de la inhabilitación [Énfasis añadido]"**. Tesis aislada 2a. XX/2009; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, marzo de 2009; Pág. 477; Registro: 167635; y **"MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del vocablo "excesivo", así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda [Énfasis añadido]"**. Jurisprudencia P./J. 9/95; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo II, Julio de 1995; Pág. 5; Registro: 200347.

⁴³ Resulta aplicable la siguiente tesis: **"RECARGOS Y SANCIONES. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD NO DEPENDEN DE QUE GUARDEN UNA RELACIÓN CUANTITATIVA CON LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS. El artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación determina que los recargos y las sanciones, entre otros conceptos, son accesorios de las contribuciones y participan de su naturaleza, lo que los sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como son los de proporcionalidad y equidad, principios estos que, tratándose de los recargos y las sanciones, no pueden interpretarse como una relación cuantitativa entre lo principal y lo accesorio, de lo que se siga que su monto no pueda exceder de una determinada cantidad, en virtud de que lo accesorio de los recargos y sanciones no reconoce tal limitación porque tienen sus propios fundamentos. Los recargos son accesorios de las contribuciones dado que surgen como consecuencia de la falta de pago oportuno de ellas, esto es, para que se origine la obligación de cubrir**

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

- b) Conforme al principio de proporcionalidad, la sanción debe atender a criterios objetivos y subjetivos;
- c) El monto de las sanciones administrativas debe ser determinado, en principio, atendiendo a elementos objetivos;
- d) Los elementos subjetivos deberán ser considerados para individualizar la sanción de que se trate, atenuándola o agravándola, de acuerdo con las circunstancias particulares de la conducta de cada uno de los entes sancionados; y
- e) En todo caso, los elementos que integran la evaluación de la sanción deben ponderarse en su conjunto con la finalidad de determinar la gradación de la sanción.

En ese sentido, para el efecto de imponer la sanción que en derecho corresponda, es necesario considerar los elementos para determinar la gravedad de la infracción, de los cuales el artículo 130 de la LFCE,⁴⁴ hace una lista enunciativa y no limitativa y que contiene elementos objetivos y subjetivos que son tomados en cuenta para efectos de determinar la gravedad de la infracción misma que debe ser considerada para fijar el monto de la sanción.⁴⁵

recargo al fisco es imprescindible la existencia de una contribución que no haya sido pagada en la fecha establecida por la ley; de ahí que, si no se causa la contribución no puede incurrirse en mora, ni pueden originarse los recargos, ya que éstos tienen por objeto indemnizar al fisco por la falta de pago oportuno de contribuciones, mientras que las sanciones son producto de infracciones fiscales que deben ser impuestas en función a diversos factores, entre los que descuellan como elementos subjetivos, la naturaleza de la infracción y su gravedad. Desde esa óptica, el monto de los recargos y, por consiguiente, su proporcionalidad y equidad, dependerán de las cantidades que durante la mora deje de percibir el fisco, mientras que el monto de las sanciones dependerá de las cantidades que por concepto de pago de contribuciones haya omitido el obligado. Así, aquellos requisitos constitucionales referidos a los recargos, se cumplen, tratándose de la ley que los previene, cuando ésta ordena tomar en consideración elementos esencialmente iguales a los que corresponden para la determinación de intereses, como son la cantidad adeudada, el lapso de la mora y los tipos de interés manejados o determinados durante ese tiempo. En cambio, la equidad y la proporcionalidad de las sanciones, sólo pueden apreciarse atendiendo a la naturaleza de la infracción de las obligaciones tributarias impuestas por la ley, así como a la gravedad de dicha violación y a otros elementos subjetivos, siendo obvio que su finalidad no es indemnizatoria por la mora, como en los recargos, sino fundamentalmente disuasiva o ejemplar [Énfasis añadido]". Tesis Aislada P. C/98; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo VIII, diciembre de 1998; Pág. 256; Registro: 194943.

⁴⁴ La LFCE señala: "Artículo 130.- En la imposición de multas se deberán considerar los elementos para determinar la gravedad de la infracción, tales como el daño causado; los indicios de intencionalidad; la participación del infractor en los mercados; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica o concentración; así como su capacidad económica; y en su caso, la afectación de las atribuciones de la Comisión".

⁴⁵ Resulta aplicable por analogía la tesis que señala: "**RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA QUE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD DEBE PONDERAR TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO.** Tanto los principios como las técnicas garantistas desarrolladas por el derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador, en virtud de que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado. Así, al aplicarse sanciones administrativas deben considerarse los elementos previstos por el derecho penal para la individualización de la pena, que señalan al juzgador su obligación de ponderar tanto aspectos objetivos (circunstancias de ejecución y gravedad del hecho ilícito) como subjetivos (condiciones personales del agente, peligrosidad, móviles, atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta de razones suficientes impedirá al servidor público sancionado conocer los criterios fundamentales de la decisión, aunque le permita cuestionarla, lo que trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material. En ese contexto, para que una sanción administrativa se considere debidamente fundada y motivada, no basta que la autoridad cite el precepto que la obliga a tomar en cuenta determinados aspectos, sino que esa valoración debe justificar realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente el grado de responsabilidad del servidor público en forma

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

Dichos elementos son “[...] el daño causado; los indicios de intencionalidad; la participación del infractor en los mercados; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica o concentración; así como su capacidad económica; y en su caso, la afectación al ejercicio de las atribuciones de la Comisión”.

A continuación, se realiza su análisis para efectos de graduar la sanción que procede imponer:

1. Daño Causado

Para el caso concreto, el concepto de “daño causado” no se actualiza ya que se sanciona el incumplimiento del plazo establecido en la RESOLUCIÓN de la entrega del reporte anual en un plazo establecido al que se sujetó la realización o la subsistencia de una transacción a la luz de lo señalado en el artículo 127, fracción IX, de la LFCE.

Como se ha mencionado a lo largo de la presente resolución, de conformidad con los términos en los que fue emitido el ACUERDO DE INICIO, no existe señalamiento alguno en contra de G500 respecto de la comisión de una práctica monopólica o concentración ilícita. En este sentido, debido al alcance de las causas que motivaron el ACUERDO DE INICIO —el posible incumplimiento de las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN— no es aplicable para determinar la gravedad de la infracción, el análisis sobre la existencia o inexistencia de un daño causado al proceso de competencia y la libre concurrencia.

2. Participación del infractor en los mercados y tamaño de mercado afectado

En el presente caso no es necesario el estudio de los elementos “participación del infractor en los mercados” y “tamaño de mercado afectado” como parte de la gravedad de la infracción, ya que los mismos sirven para cuantificar el daño al mercado ocasionado por una determinada conducta u omisión anticompetitiva y no se sanciona un daño causado al mercado sino el incumplimiento a una condición fijada en una resolución en términos de los artículos 90, fracción V, párrafo tercero, y 91 de la LFCE.

3. Duración de la práctica o concentración

En el presente caso, el elemento relativo a la “duración de la práctica o concentración” no se actualiza porque, como se ha señalado, en el presente incidente no se sanciona ni una práctica ni una concentración ilícita, hipótesis a las que hace referencia el elemento que nos ocupa, sino el incumplimiento de condiciones impuestas para la autorización de una concentración en términos de los artículos 90, fracción V, párrafo tercero, y 91 de la LFCE.

acorde y congruente, aquélla debe ponderar todos los elementos objetivos (circunstancias en que la conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y condiciones particulares del servidor público y las atenuantes que pudieran favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando que no sea el resultado de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley ordena, y así la sanción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun cuando la autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones, éste no es irrestricto, pues debe fundar y motivar con suficiencia el porqué de su determinación [Énfasis añadido]”. Tesis Aislada I.4o.A.604 A; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007; Pág. 1812; Registro: 170605.

4. *Afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE*

Para determinar el nivel de gravedad de la conducta es necesario, en primer lugar, atender al bien jurídico que protege la norma. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la LFCE es el ordenamiento reglamentario del artículo 28 constitucional, el cual ha sido declarado por la Segunda Sala de la SCJN de orden público e interés social,⁴⁶ por lo que interesa a la sociedad en general que la COFECE realice su labor de prevención de las conductas que puedan restringir el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

En aras del cumplimiento de su objeto, la LFCE no sólo establece diversas normas prohibitivas o imperativas, sino que también prevé atribuciones que permiten a la autoridad ejercer funciones de naturaleza preventiva para proteger el funcionamiento eficiente de los mercados.

⁴⁶ Sirven de apoyo las siguientes tesis de jurisprudencia: i) ***"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FORMULADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PARA INVESTIGAR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, PORQUE DE OTORGARSE SE AFECTARÍA EL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.*** Es improcedente conceder la suspensión solicitada en contra de los requerimientos de información y documentación formulados por la Comisión Federal de Competencia en ejercicio de sus atribuciones previstas en los artículos 24, fracción I y 31, primer párrafo, de la Ley Federal de Competencia Económica, dirigidas a investigar prácticas que pueden resultar monopólicas, en virtud de no satisfacerse el requisito contemplado en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, consistente en que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior porque la ley citada en primer lugar, conforme a su artículo 1o., es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, de orden público e interés social, por lo que al ser su fin principal proteger el proceso de libre concurrencia en todas las áreas de la economía nacional, mediante la prevención, sanción y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás sistemas que afecten el expedito funcionamiento del mercado, obligando al público consumidor a pagar precios altos en beneficio indebido de una o varias personas, los indicados requerimientos no son susceptibles de suspenderse, porque de lo contrario se permitiría a las quejas dejar de proporcionar los informes y documentos requeridos, con lo cual se harían nugatorias las facultades relativas y se paralizaría el procedimiento de investigación respectivo [Enfasis añadido]". [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIX, Abril de 2004; Pág. 447. 2a./J. 37/2004; Registro: 181645; y ii) ***"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS ACTOS PROHIBITIVOS CONTENIDOS EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, APOYADAS EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUES DE OTORGARSE SE INCORPORARÍAN A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO DERECHOS QUE NO TENÍA ANTES DE LA EMISIÓN DE TALES ACTOS.*** Es improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada en contra de los efectos de las resoluciones emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica, consistentes en la prohibición de realizar las conductas a que se refiere expresamente el artículo 10 de la ley federal relativa, que pueden resultar monopólicas, en virtud de que no se satisface el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues la ley federal antes citada, reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público e interés social, y tiene como fin principal proteger el proceso de libre concurrencia en todas las áreas de la economía nacional, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás sistemas que afecten el expedito funcionamiento del mercado, obligando al público consumidor a pagar precios altos en beneficio indebido de una o varias personas determinadas, de manera que las medidas tomadas por la autoridad responsable, al prohibir a la parte quejosa la realización de actos o conductas que puedan constituir prácticas monopólicas, no son susceptibles de suspenderse, máxime que tales actos se encuentran expresamente prohibidos por la ley, por lo que aquélla no está legitimada para realizar tales conductas y, por ende, de concederse la suspensión, y levantar la prohibición de los actos a que se alude, sería tanto como permitir al impetrante de garantías la realización de prácticas monopólicas que nunca formaron parte de su esfera jurídica, lo que implicaría que con la medida cautelar se estaría creando a favor del gobernado un derecho que no tenía antes de la emisión del acto reclamado, afectándose el interés social y el orden público [Enfasis añadido]". [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVI, Julio de 2002; Pág. 358. 2a./J. 53/2002; Registro: 186413.

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

Entre los principales instrumentos preventivos previstos en la LFCE se encuentra el procedimiento para la notificación de concentraciones y la imposición de condiciones. Dichos procedimientos permiten evitar las dificultades y los costos que conlleva investigar y, en su caso, sancionar, con posterioridad a su realización, las concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.

Dicho criterio lo ha reafirmado el PJF, como se observa en la sentencia de amparo en revisión R.A. 73/2015 emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones,⁴⁷ que realizó un análisis del procedimiento de notificación de concentraciones y, específicamente de la naturaleza jurídica de las condiciones que se imponen en éste:

“En primer término, resulta pertinente establecer que la naturaleza jurídica de la condición aludida no corresponde a la descripción de una infracción cuya previsión y punibilidad pertenezca al ámbito del derecho administrativo sancionador. La concentración de agentes económicos se encuentra regida por disposiciones de naturaleza económica-regulatoria, en la medida que su realización está condicionada a la autorización (sanción) que emita la administración pública, a partir del análisis de diversos elementos, como son el poder que los involucrados ejerzan en el mercado relevante, el grado de concentración y sus efectos, la participación de otros agentes económicos, la eficiencia del mercado, así como otros criterios e instrumentos analíticos previstos en disposiciones regulatorias y en otros criterios técnicos.”⁴⁸

Tales medidas tienen por finalidad prever que no se afecte o deteriore el funcionamiento eficiente de los mercados y el proceso de libre concurrencia. La autorización aludida consiste en un acto unilateral de la administración pública, por medio del cual un particular puede desarrollar una actividad para la que está previamente legitimado, pues el interesado tiene un derecho preexistente, supeditado a que se cubran ciertos requisitos, condiciones o circunstancias, que valorará la autoridad.”⁴⁹

⁴⁷ Versión pública de la sentencia del amparo en revisión R.A.73/2015, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, disponible en: https://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1304/13040000170986860005004.doc_1&sec=Mario_Jim%C3%A9nez_Jim%C3%A9nez&svp=1

⁴⁸ “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Federal de Competencia Económica, el cual es del tenor siguiente: “Artículo 63. Para determinar si la concentración no debe ser autorizada o debe ser sancionada en los términos de esta Ley, se considerarán los siguientes elementos: - - - I. El mercado relevante, en los términos prescritos en esta Ley; - - - II. La identificación de los principales agentes económicos que abastecen el mercado de que se trate, el análisis de su poder en el mercado relevante, de acuerdo con esta Ley, el grado de concentración en dicho mercado; - - - III. Los efectos de la concentración en el mercado relevante con respecto a los demás competidores y demandantes del bien o servicio, así como en otros mercados y agentes económicos relacionados; - - - IV. La participación de los involucrados en la concentración en otros agentes económicos y la participación de otros agentes económicos en los involucrados en la concentración, siempre que dichos agentes económicos participen directa o indirectamente en el mercado relevante o en mercados relacionados. Cuando no sea posible identificar dicha participación, esta circunstancia deberá quedar plenamente justificada; - - - V. Los elementos que aporten los agentes económicos para acreditar la mayor eficiencia del mercado que se lograría derivada de la concentración y que incidirá favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia, y - - - VI. Los demás criterios e instrumentos analíticos que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias y los criterios técnicos.”

⁴⁹ “Ramírez Marín, Juan, *Derecho Administrativo Mexicano, Primer Curso*, editorial Porrúa, México, 2009, página 383.”

Así, el órgano regulador podrá imponer condiciones a los agentes económicos que pretendan la concentración, con la finalidad de garantizar que con la autorización de dicha operación no se obstaculice, disminuya, dañe o impida la libre concurrencia o la competencia económica.⁵⁰

En congruencia con lo expuesto, es dable estimar que las condiciones a las que se llegue a sujetar la autorización de las concentraciones de agentes económicos, constituyen actos jurídicos administrativos de naturaleza regulatoria (cláusulas regulatorias), de orden público e interés social, vinculados al marco legal en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones. La experiencia internacional en materia de competencia económica corrobora los asertos precedentes, pues como sucedió en los Estados Unidos de América con la promulgación de la Ley de Mejoras al Derecho para la Competencia Hart-Scott-Rodino (Antitrust Improvements Act) de mil novecientos setenta y seis, al establecerse un procedimiento obligatorio de notificación previa a la fusión de empresas (análogo al caso mexicano), se modifica la manera como se vigila el cumplimiento de las normas relativas a fusiones, al generar que las dependencias estatales funjan más como reguladores que anticipan o prevén situaciones eventuales, por lo que negocian medidas precautorias o de reparación consensuales que como litigantes que impugnán transacciones ilícitas⁵¹

La implementación de los procedimientos de notificación de concentraciones se aparta de la tendencia general del sistema de derecho de la competencia, de valorar la conducta después de los hechos, pues al analizar tales concentraciones de manera previa a su realización, el gobierno funge como una entidad regulatoria⁵² dotada de atribuciones para imponer medidas bajo una perspectiva ex ante. De esta forma, la política relativa a las concentraciones se rige por los lineamientos expedidos por las dependencias encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas en la materia.

Las políticas públicas implementadas por los gobiernos de los Estados involucran cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo político definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado.⁵³ Las políticas públicas de carácter regulatorio comprenden todas las actividades - normativas o no- que pretenden influir directa o indirectamente en las conductas o comportamientos de los agentes y operadores, y en la consecución de los objetivos deseados. Regular, por tanto, no se limita a la emisión de normas, sino que comprende otras actividades tales como la dirección y organización públicas de los sectores o mercados. La política regulatoria en materia de competencia económica se caracteriza por ser el conjunto de actuaciones públicas tendentes a la observancia y seguimiento del sector, a la supervisión de las empresas reguladas, a la adjudicación de derechos y la concreción de sus obligaciones, a la inspección de la actividad, así como a la resolución de conflictos, entre otros aspectos. De esta forma, las políticas regulatorias genéricas presentan diferencias con las que son propias de la materia de competencia económica. Las primeras presuponen amplias facultades del Estado para imponer condiciones a la actividad de los agentes económicos y tienen un propósito previsor de situaciones nocivas, en tanto que las segundas comprenden también la revisión de la legalidad de la actuación de dichos agentes en el mercado, de acuerdo con hechos ya verificados o pasados, atendiendo a los resultados que refleja el

⁵⁰ "Las concentraciones que generen los efectos referidos se considerarán ilícitas, tal como lo previene el artículo 62 de la Ley Federal de Competencia Económica, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 62. Se consideran ilícitas aquellas concentraciones que tengan por objeto o efecto obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia o la competencia económica."

⁵¹ "Gellhorn, Ernest; Kovacic E., William; y Calkins, Stephen, Derecho y Economía de la Competencia, editado por la Comisión Federal de Competencia, con autorización de Thomson Reuters/West, 2004, páginas 411 y 412."

⁵² "Ídem, página 414."

⁵³ "24 Lahera P., Eugenio, Política y Políticas Públicas, estudio contenido en el proyecto "Política y Políticas Públicas en los Procesos de Reforma en América Latina. Similitudes y Diversidades", elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Proyecto FRA/02/073."

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

funcionamiento de aquél. Por tanto, las facultades que se ejercen ex post tienden a verificar la legalidad de las prácticas de negocios de los agentes económicos, con posterioridad a su realización. En cambio, las facultades que se ejercen ex ante se dirigen a la consecución de objetivos específicos de política pública.⁵⁴ De acuerdo con lo anterior, el análisis para la autorización de concentraciones o fusiones parte de un componente económico cuya metodología se basa en una perspectiva de estudio ex ante, la cual considera las consecuencias dinámicas que las decisiones actuales generarán en la actividad futura de los agentes económicos en el mercado de que se trate; a diferencia del tradicional análisis legal dirigido a la solución de controversias, el cual parte de una perspectiva ex post, en la cual la decisión judicial de casos atiende a eventos pasados.

La perspectiva ex ante empleada por el órgano regulador al analizar las concentraciones o fusiones sujetas a su autorización es reflejo de diversos principios económicos que ven no únicamente los efectos inmediatos de los actos o políticas en la materia, sino las consecuencias que en el largo plazo pueden llegar a generar en el mercado. Las distinciones apuntadas entre la función administrativa de autotutela del orden público en materia de competencia económica y la actividad sancionadora del Estado en dicha materia, resultan relevantes para el presente caso, dado que las condiciones a las que se sujeta la autorización de las concentraciones de los agentes económicos no constituyen normas sancionatorias de ilícitos analizables desde una perspectiva ex post, sino que se trata de directrices de contenido programático dirigidas a la consecución de fines públicos” [énfasis añadido].⁵⁵

En la RESOLUCIÓN se expresó con claridad que **al no tener información esta autoridad se encontraba material y jurídicamente imposibilitada para autorizar la incorporación de nuevos socios por lo que** si bien se consideró que la propuesta de condiciones presentada por G500 resultaba viable para prevenir que, como resultado de la concentración, se generaran riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia, lo cierto es que el PLENO de esta COFECE agregó que a efecto de dar cumplimiento a las condiciones presentadas por G500 y que se pudiera evaluar mediante un procedimiento expedito la incorporación de cada nuevo socio potencial a G500, ésta y los socios iniciales, así como eventualmente los socios potenciales que estén incorporados a G500, deberían presentar información actualizada, a más tardar los días treinta de enero de cada año el valor y el volumen anual de ventas así como la información concerniente a los proveedores de combustible y de los servicios de logística:

“TERCERO. [...]

Esta autoridad se encuentra ante una imposibilidad jurídica y material de análisis sobre la pretensión de G500 y por lo tanto conocer los efectos de la concentración por la incorporación de nuevos socios: Es por ello que esta autoridad no puede autorizar la incorporación de nuevos socios que no conoce y medir los efectos en competencia por cada incorporación de las estaciones de servicio.

[...]

Al ser incierto quiénes serán los socios que se irían incorporando y que formarían parte de la

⁵⁴ “Massimo Motta, *Competition Policy: Theory and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, 2003, prefacio. 26 Henry N. Butler, Christopher R. Drahozal y Joanna Shepherd, *Economic Analysis for Lawyers*, Carolina Academic Press, Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos de América, 2014, tercera edición, página 33.”

⁵⁵ *Op cit.* Versión pública de la sentencia del amparo en revisión R.A.73/2015, páginas 94 a 99, disponible en: https://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1304/13040000170986860005004.doc_1&sec=Mario_Jim%C3%A9nez_Jim%C3%A9nez&svp=1

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

concentración notificada, existe el riesgo de que los niveles de concentración en una TAR aumenten de manera importante, por lo que no puede descartarse, con la información disponible, una posible afectación al proceso de competencia y libre concurrencia y dado que en este momento, es imposible analizar a los posibles nuevos socios que se incorporarían a G500 no se puede autorizar la concentración sobre la base de nuevos socios distinta a los cincuenta y cuatro (54) socios iniciales, es decir, esta autoridad no puede pronunciarse y menos aún autorizar la concentración con base en socios con los que G500 está en negociaciones para la expansión del grupo de compra.

Por todo lo anterior, con base en la información proporcionada por G500 sobre los cincuenta y cuatro (54) socios iniciales y los socios potenciales no se puede descartar posibles riesgo posibilidad de prevenir posibles efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia, ya que tal y como se ilustró anteriormente y con la información disponible con el cual se construyó el escenario planteado en las TARs de 18 de Marzo y Lázaro Cárdenas, y en caso de que continúen incorporándose nuevos socios a G500, los niveles de concentración en cada TAR, por lógica, aumentarían, y con ello no puede descartarse una posible afectación al proceso de competencia y libre concurrencia.

Como se señaló previamente, la incorporación de socios potenciales no pueden ser autorizados sin un análisis de los efectos que tendría esa incorporación en el proceso de competencia y libre concurrencia y por tanto, esta autoridad no está en condiciones de establecer si dichas incorporaciones actualizarían los supuestos a que hace referencia el artículo 62 en correlación con el artículo 64 de la LFCE, por lo que al ser incierto y no tener información al respecto, esta Comisión se encuentra material y jurídicamente imposibilitada para autorizar la incorporación de nuevos socios; incorporación que forma parte de la concentración notificada y ex ante no podría descartarse que la concentración por incorporación de nuevos socios pudiera obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia y la competencia económica.

Por tal motivo, el ingreso de nuevos socios a G500 podría brindarle poder de compra en cada uno de los tipos de combustibles en el área de influencia de las diversas TARs, o en su caso en el área de influencia de los diferentes puntos de internamiento de los combustibles, por lo que también se desconoce si derivado del crecimiento de G500 podrían establecerse barreras a la entrada, de manera que podría obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia y la competencia económica.

Asimismo, tampoco se conoce los efectos de la participación de G500 en [REDACTED] B [REDACTED] B [REDACTED] B [REDACTED] B el evento de que desearán modificar la concentración en términos en el sentido de que "(...) sus socios continuarán participando de manera independiente en la comercialización de combustibles, así como de otros productos y servicios al menudeo a través de Estaciones de Servicio (...)"⁵⁷ cuestiones que no son materia de la presente concentración.

⁵⁶ "Folio 15."

⁵⁷ "Folios 15 y 16. La escritura constitutiva de G500 señala que uno de los objetos sociales de esa sociedad es la "venta" de combustibles. Al respecto, las partes señalaron que el término "venta" tiene que ver con la posibilidad de realizar transacciones de compra venta exclusivamente con sus propios accionistas, a efecto de que éstos puedan comercializar o expender al menudeo el producto en estaciones de servicio, y que "de ninguna manera se refiere a la posibilidad comercializar alguna clase de combustibles al menudo (sic), al consumidor finar". Folio 2505."

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

Cuarta. [...]

El veinticinco de enero de dos mil diecisiete, las partes fueron notificadas sobre los posibles riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia que presenta la operación.

[...]

Al respecto, el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, las Partes presentaron una propuesta de condiciones con fundamento en lo establecido en los dos últimos párrafos del artículo 90 de la LFCE.

[...]

Se considera que la Propuesta de Condiciones transcrita resulta viable para prevenir que, como resultado de la concentración, se generen riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia

[...]

A efecto de que dar cumplimiento a los compromisos [sic] presentados por G500, y para que esta Comisión pueda evaluar el efecto de la incorporación de cada nuevo socio potencial a G500, ésta y los socios iniciales, así como eventualmente los socios potenciales que estén incorporados a G500, deberán presentar información actualizada, a más tardar los días 30 de enero de cada año, de lo siguiente:

- a. *Los socios iniciales y los posteriores que formen parte de G500 deberán entregar el volumen anual de ventas (en litros) y el valor anual de ventas (en pesos mexicanos), de cada uno de los tipos de gasolina y diésel que ofreció, el año anterior al informe; el valor anual de ventas (en pesos mexicanos) de aceites, aditivos, anticongelantes y otros productos automotrices ("productos automotrices"), para el año anterior al informe; el valor anual de ventas (en pesos mexicanos) de productos de otra índole (i.e alimentos, bebidas y productos de consumo), para el año anterior al informe.*
- b. *Entregar información concerniente a los proveedores de combustible y de los servicios de logística. [Énfasis añadido]*".

Lo anterior evidencia que en la RESOLUCIÓN se expresó claramente que para que el mecanismo propuesto por G500 funcione y permita la inclusión de socios potenciales sin generar riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia esta COFECE requiere la entrega de información actualizada del valor y el volumen anual de ventas así como la información concerniente a los proveedores de combustible y de los servicios de logística de forma oportuna, en términos de los artículos 90, fracción V, último párrafo, y 91 de la LFCE.

Por tanto, la información que la RESOLUCIÓN les obliga a presentar en el informe anual se encuentra vinculada a las demás condiciones propuestas y aceptadas por G500, mismas que guardan proporción con la corrección de los efectos de la concentración por lo que su entrega oportuna es de gran relevancia para esta autoridad.

Por otra parte, se indica que el artículo 130 de la LFCE establece un elemento que radica en considerar, en su caso, la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE. Ese elemento es importante, ya que implica el reconocimiento legislativo de que ese ejercicio constituye un bien jurídico que debe protegerse en todo momento y que debe considerarse para determinar las sanciones que correspondan.

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

Hacer caso omiso a una orden de esta autoridad, a pesar de haber tenido conocimiento de las consecuencias, atenta contra el interés público al actualizar un riesgo en los mercados que se intentaron proteger. Así, el cumplimiento cabal de las resoluciones emitidas por esta COFECE es vital a efectos de que no se generen monopolios, estancos, prácticas monopólicas y violaciones que puedan ocasionar un daño actual o potencial al mercado, más aún cuando esta autoridad tiene el mandato constitucional de prevenir dichas violaciones en protección de la competencia y la libre concurrencia: “El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes [énfasis añadido]”.⁵⁸

Específicamente, la COFECE cuenta con la facultad para imponer condiciones cuando se percate que realizar una concentración en los términos en los que se notificó generaría riesgos al proceso de competencia económica y libre concurrencia. En caso de que los agentes económicos incumplan con las condiciones que ellos mismos aceptaron implica que la autoridad no pueda alcanzar el resultado deseado al momento de imponer condiciones. No obstante, se considera como atenuante el hecho de que G500 presentó la información requerida en el informe anual al día siguiente del plazo establecido en la RESOLUCIÓN sin la existencia de algún requerimiento.

5. Indicios de Intencionalidad

En el presente caso, no se comprueba la existencia de indicios de intencionalidad por parte de G500 para incumplir de manera deliberada y premeditada la RESOLUCIÓN, ya que consta en el EXPEDIENTE que G500 presentó la información actualizada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, es decir al día siguiente al plazo establecido en la RESOLUCIÓN.

La conducta de G500 evidencia al menos un actuar negligente, ya que de cualquier forma habría incurrido en una violación al deber objetivo de cuidado respecto del cumplimiento de los plazos establecidos en la RESOLUCIÓN; sin embargo, debe señalarse que la negligencia en el cumplimiento de la RESOLUCIÓN no impide considerar que se actualiza el incumplimiento, ni la imposición de una sanción a efecto de disuadir posibles incumplimientos en el futuro.

Al haber aceptado en todos sus términos lo establecido en la RESOLUCIÓN, incluso en un escenario de negligencia, se considera que G500 debió asegurarse de que se cumplieran dichas obligaciones.

6. Capacidad económica

El artículo 130 de la LFCE establece que al imponer e individualizar sus sanciones, la COFECE debe considerar, entre otras cosas, la capacidad económica del agente económico. Al respecto, en el ACUERDO DE INICIO se requirió a G500 para que presentara los estados financieros auditados y/o su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho bajo

⁵⁸ Artículo 28, párrafo décimo cuarto, de la CPEUM.

Handwritten signatures and initials: "uy", "X", "m", and "P".



1456

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

el apercibimiento que, de no hacerlo así, se presumiría que cuenta con la capacidad económica necesaria para hacer frente a la sanción.⁵⁹

El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, la DGAJ emitió acuerdo en que se tuvieron por presentados los escritos de quince de mayo de dos mil diecinueve presentados por G500 por medio del cual presentó diversas declaraciones anuales de impuestos correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciocho.⁶⁰

En la misma fecha, el ST emitió el oficio ST-CFCE-2019-083 en que solicitó al SAT las declaraciones anuales de impuestos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho de los notificantes que no desahogaron el requerimiento realizado en el ACUERDO DE INICIO⁶¹ y mediante acuerdo de seis de junio de dos mil diecinueve, la DGAJ tuvo por presentada la información y documentos presentados por el SAT.⁶²

El artículo 127, fracción IX, de la LFCE establece lo siguiente:

“Artículo 127. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:

[...]

IX. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente Económico, por haber incumplido con las condiciones fijadas en la resolución de una concentración, sin perjuicio de ordenar la desconcentración”.

Conforme a lo anterior, los montos a los que ascienden los ingresos acumulables de los agentes económicos responsables del incumplimiento que se sanciona, así como los montos a los que ascenderían las multas máximas son los siguientes:

AGENTES ECONÓMICOS RESPONSABLES		INGRESOS ACUMULABLES 2018	MULTA MÁXIMA (10%)
1	Administradora de Gasolineras Esmegas, S.A. de C.V.	B	B
2	Consorcio Plan, S.A. de C.V.		
3	Consorcio Río Consulado, S.A. de C.V.		
4	El Faro de Santander, S.A. de C.V.		
5	Energéticos Tec, S.A. de C.V.		
6	Fuente las Varas, S.A. de C.V.		

⁵⁹ Folios 001 a 014.

⁶⁰ Folios 1254 a 1256. Dicho acuerdo se notificó por lista el veintidós de dos mil diecinueve.

⁶¹ Folios 1257 y 1258. Dicho acuerdo se notificó por oficio el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.

⁶² Folios 1396 a 1399. Dicho acuerdo se notificó por lista el siete de junio de dos mil diecinueve.

⁶³ Folio 216.

⁶⁴ Folio 237.

⁶⁵ Folio 257.

⁶⁶ Folio 279.

⁶⁷ Folio 299.

⁶⁸ Folio 322.



1457

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

AGENTES ECONÓMICOS RESPONSABLES		INGRESOS ACUMULABLES 2018	MULTA MÁXIMA (10%)
7	Gasolinera Valle de Guadalupe, S.A. de C.V.		
8	Gasomira, S.A. de C.V.		
9	Grupo Ejército, S.A. de C.V.		
10	Grupo Jimmex, S.A. de C.V.		
11	Inmobiliaria Aja Gomez, S.A. de C.V.		
12	Inmobiliaria Igova, S.A. de C.V.		
13	JAPI, S.A. de C.V.		
14	Luis Caballero Navarro		
15	Novogas Tollocan, S.A. de C.V.		
16	Oitaben Gas, S.A. de C.V.		
17	Operadora Aguesu, S.A. de C.V.		
18	Operadora Ermita, S.A. de C.V.		
19	Puente los Arrollos, S.A. de C.V.		
20	Puerto Alisas, S.A. de C.V.		
21	Servicio Alisas, S.A. de C.V.		
22	Servicio Cualimex, S.A. de C.V.		
23	Servicio Cubija II, S.A. de C.V.		
24	Servicio Cubija, S.A. de C.V.		
25	Servicio el Escudo, S.A. de C.V.		
26	Servicio el Hueso, S.A. de C.V.		
27	Servicio el Rescaño, S.A. de C.V.		

- ⁶⁹ Folio 343.
- ⁷⁰ Folio 365.
- ⁷¹ Folio 386.
- ⁷² Folio 407.
- ⁷³ Folio 429.
- ⁷⁴ Folio 449.
- ⁷⁵ Folio 470.
- ⁷⁶ Folio 479.
- ⁷⁷ Folio 501.
- ⁷⁸ Folio 523.
- ⁷⁹ Folio 545.
- ⁸⁰ Folio 568.
- ⁸¹ Folio 592.
- ⁸² Folio 614.
- ⁸³ Folio 634.
- ⁸⁴ Folio 639.
- ⁸⁵ Folio 672.
- ⁸⁶ Folio 693.
- ⁸⁷ Folio 714.
- ⁸⁸ Folio 735.
- ⁸⁹ Folio 759.

Eliminado: cuarenta y dos palabras.

Handwritten signatures and initials



1458

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

AGENTES ECONÓMICOS RESPONSABLES		INGRESOS ACUMULABLES 2018	MULTA MÁXIMA (10%)
28	Servicios Galabria, S.A. de C.V.		
29	Servicio Gasget, S.A. de C.V.		
30	Servicio Gomasa S.A. de C.V.		
31	Servicio Grillos, S.A. de C.V.		
32	Servicio Jinetes, S.A. de C.V.		
33	Servicio la Montañesa, S.A. de C.V.		
34	Servicio Ojo de Agua, S.A. de C.V.		
35	Servicio Santalbi, S.A. de C.V.		
36	Servicio Serrano, S.A. de C.V.		
37	Servicio Solares, S.A. de C.V.		
38	Servicio Tecámac San Cipriano, S.A. de C.V.		
39	Servicio Tenayuca, S.A. de C.V.		
40	Servicio Tres Encinas, S.A. de C.V.		
41	Servicio Ventura Puente, S.A. de C.V.		
42	Servicios Energéticos Alfareros, S.A. de C.V.		
43	Servicios Energéticos de Tizayuca, S.A. de C.V.		
44	Servicios Energéticos de Zumpango, S.A. de C.V.		
45	Servicios Energéticos Hergom, S.A. de C.V.		
46	Servicios Energéticos Mexiquenses, S.A. de C.V.		
47	Servicio Isaura, S.A. de C.V.		
48	Servieje, S.A. de C.V.		

- ⁹⁰ Folio 780.
- ⁹¹ Folio 801.
- ⁹² Folio 823.
- ⁹³ Folio 843.
- ⁹⁴ Folio 865.
- ⁹⁵ Folio 885.
- ⁹⁶ Folio 906.
- ⁹⁷ Folio 927.
- ⁹⁸ Folio 947.
- ⁹⁹ Folio 969.
- ¹⁰⁰ Folio 989.
- ¹⁰¹ Folio 1010.
- ¹⁰² Folio 1032.
- ¹⁰³ Folio 1054.
- ¹⁰⁴ Folio 1075.
- ¹⁰⁵ Folio 1095.
- ¹⁰⁶ Folio 1117.
- ¹⁰⁷ Folio 1133.
- ¹⁰⁸ Folio 1159.
- ¹⁰⁹ Folio 1180.
- ¹¹⁰ Folio 1200.

Eliminado: cuarenta y dos palabras.



1459

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

AGENTES ECONÓMICOS RESPONSABLES		INGRESOS ACUMULABLES 2018	MULTA MÁXIMA (10%)
49	Gasolinera Montevideo, S.A. de C.V.	B	B
50	Río Tuerto, S.A. de C.V.		
51	G500, S.A.P.I. de C.V.		

7. Gravedad de la infracción

Se acreditó el incumplimiento de la **entrega del informe anual** con información actualizada del valor anual de ventas (en pesos mexicanos) de (i) cada uno de los tipos de gasolina y diésel [y el volumen anual de ventas (en litros)]; (ii) aceites, aditivos, anticongelantes y otros productos automotrices (“productos automotrices”); y (iii) de productos de otra índole (alimentos, bebidas y productos de consumo); así como de la información concerniente a los proveedores de combustible y de los servicios de logística que debía presentarse **a más tardar el día treinta de enero de cada año**.

El incumplimiento analizado únicamente se refiere al incumplimiento de una de las condiciones impuestas en la RESOLUCIÓN emitida por el Pleno de la Comisión, en el presente caso no se analiza la existencia de un daño al mercado.

En la RESOLUCIÓN se expresó con claridad que al no tener información esta autoridad se encontraba material y jurídicamente imposibilitada para autorizar la incorporación de nuevos socios por lo que si bien el incumplimiento fue de sólo un día, no pasa inadvertido el hecho de que permitir que las condiciones se incumplan pone en riesgo el proceso de competencia y libre concurrencia, pues se consideró que la propuesta de condiciones presentada por G500 resultaba viable para prevenir que, como resultado de la concentración, se generaran riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia, siempre y cuando se cumpliera con los plazos ahí establecidos para que se pudiera evaluar la incorporación de cada nuevo socio potencial a G500.

En este sentido, la información que la RESOLUCIÓN les obliga a presentar se encuentra vinculada a las demás condiciones propuestas y aceptadas por G500 y que resultaba viable para prevenir que, como resultado de la concentración, se generaran riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia, por lo que su entrega oportuna es de relevancia para esta autoridad.

Sin perjuicio de lo anterior, obra en el EXPEDIENTE que la información se presentó un día posterior al plazo establecido en la RESOLUCIÓN y sin mediar requerimiento.

Asimismo, respecto de la capacidad económica de G500, se considera que dicho agente económico tiene la capacidad para hacer frente a la multa que se llegase a determinar.

Por tanto, una vez analizados los elementos previstos por el artículo 130 de la LFCE se considera que en este caso la gravedad del incumplimiento imputado a G500 es **baja**.

¹¹¹ Folio 1226.

¹¹² Folio 1248.

¹¹³ Folio 1290.

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

8. Imposición de la multa

La exposición de motivos de la LFCE contempla lo siguiente:

“En materia de sanciones, se prevé que éstas sean de tal magnitud que tengan un verdadero efecto disuasivo y minimice los incentivos a infringir la ley [Énfasis añadido].”

Asimismo, esta autoridad considera que un parámetro objetivo a considerar en el presente caso corresponde: i) al tiempo de retraso en el cumplimiento consistente en 1 (un) día y ii) que no se verificaron indicios intencionalidad por parte de G500 para incumplir con la RESOLUCIÓN.

Dados los elementos analizados en la presente resolución, en particular, considerando que la gravedad del incumplimiento imputado a G500 es **baja**, de conformidad con los razonamientos previamente expuestos y que cuentan con recursos suficientes para hacer frente a la sanción, se imponen las siguientes multas equivalentes al **B** % (**B**) del máximo legal que les corresponde:

AGENTES ECONÓMICOS RESPONSABLES		MONTO DE LAS MULTAS IMPUESTAS (M.N.)
1	Administradora de Gasolineras Esmegas, S.A. de C.V.	\$3,077.88
2	Consortio Plan, S.A. de C.V.	\$983.18
3	Consortio Río Consulado, S.A. de C.V.	\$1,062.21
4	El Faro de Santander, S.A. de C.V.	\$663.07
5	Energéticos Tec, S.A. de C.V.	\$854.53
6	Fuente las Varas, S.A. de C.V.	\$997.42
7	Gasolinera Valle de Guadalupe, S.A. de C.V.	\$1,501.66
8	Gasomira, S.A. de C.V.	\$1,640.95
9	Grupo Ejército, S.A. de C.V.	\$2,034.52
10	Grupo Jimmex, S.A. de C.V.	\$2,671.29
11	Inmobiliaria Aja Gomez, S.A. de C.V.	\$1,154.71
12	Inmobiliaria Igova, S.A. de C.V.	\$1,460.55
13	JAPI, S.A. de C.V.	\$1,653.97
14	Luis Caballero Navarro	\$36.05
15	Novogas Tollocan, S.A. de C.V.	\$1,562.15
16	Oitaben Gas, S.A. de C.V.	\$2,007.73
17	Operadora Aguesu, S.A. de C.V.	\$2,589.59
18	Operadora Ermita, S.A. de C.V.	\$1,160.86
19	Puente los Arrollos, S.A. de C.V.	\$620.73
20	Puerto Alisas, S.A. de C.V.	\$3,415.92
21	Servicio Alisas, S.A. de C.V.	\$1,771.08
22	Servicio Cualimex, S.A. de C.V.	\$1,087.76
23	Servicio Cubija II, S.A. de C.V.	\$354.75
24	Servicio Cubija, S.A. de C.V.	\$380.64
25	Servicio el Escudo, S.A. de C.V.	\$1,392.31

Eliminado: siete palabras.

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

AGENTES ECONÓMICOS RESPONSABLES		MONTO DE LAS MULTAS IMPUESTAS (M.N.)
26	Servicio el Hueso, S.A. de C.V.	\$2,159.26
27	Servicio el Rescaño, S.A. de C.V.	\$2,072.30
28	Servicios Galabria, S.A. de C.V.	\$1,181.41
29	Servicio Gasget, S.A. de C.V.	\$825.14
30	Servicio Gomasa S.A. de C.V.	\$3,833.43
31	Servicio Grillos, S.A. de C.V.	\$720.79
32	Servicio Jinetes, S.A. de C.V.	\$1,394.21
33	Servicio la Montañesa, S.A. de C.V.	\$1,925.55
34	Servicio Ojo de Agua, S.A. de C.V.	\$917.11
35	Servicio Santalbi, S.A. de C.V.	\$0.67
36	Servicio Serrano, S.A. de C.V.	\$1,168.07
37	Servicio Solares, S.A. de C.V.	\$1,021.29
38	Servicio Tecámac San Cipriano, S.A. de C.V.	\$1,266.55
39	Servicio Tenayuca, S.A. de C.V.	\$1,626.01
40	Servicio Tres Encinas, S.A. de C.V.	\$2,356.27
41	Servicio Ventura Puente, S.A. de C.V.	\$887.40
42	Servicios Energéticos Alfareros, S.A. de C.V.	\$1,214.43
43	Servicios Energéticos de Tizayuca, S.A. de C.V.	\$1,735.70
44	Servicios Energéticos de Zumpango, S.A. de C.V.	\$1,020.82
45	Servicios Energéticos Hergom, S.A. de C.V.	\$2,662.09
46	Servicios Energéticos Mexiquenses, S.A. de C.V.	\$2,013.28
47	Servicio Isaura, S.A. de C.V.	\$610.04
48	Servieje, S.A. de C.V.	\$1,217.53
49	Gasolinera Montevideo, S.A. de C.V.	\$2,018.04
50	Río Tuerto, S.A. de C.V.	\$2,929.83
51	G500, S.A.P.I. de C.V.	\$38.85

Con independencia de lo anterior, se informa a G500 que, ante una eventual reincidencia, esta autoridad hará uso de todas sus facultades legales para sancionar el incumplimiento de las condiciones aceptados en la RESOLUCIÓN, pudiendo imponer una multa hasta por el doble de la que correspondería, en términos del artículo 127 de la LFCE. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra y de la posibilidad de ordenar la desconcentración en términos de la fracción II de dicho artículo.

Por lo anteriormente expuesto, el PLENO,

RESUELVE

PRIMERO. Se acredita el incumplimiento de las condiciones fijadas en la resolución emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica el nueve de marzo de dos mil diecisiete en el expediente CNT-058-2016 por parte de G500, S.A.P.I. de C.V.; Administradora



1462

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

de Gasolineras Esmegas, S.A. de C.V.; El Faro de Santander, S.A. de C.V.; Energéticos Tec, S.A. de C.V.; Fuente las Varas, S.A. de C.V.; Gasolinera Valle de Guadalupe, S.A. de C.V.; Gasomira, S.A. de C.V.; Grupo Jimmex, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Aja Gomez, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Igova, S.A. de C.V.; Puente los Arrollos, S.A. de C.V.; Puerto Alisas, S.A. de C.V.; Río Tuerto, S.A. de C.V.; Servicio Alisas, S.A. de C.V.; Servicio Cubija, S.A. de C.V.; Servicio Cubija II, S.A. de C.V.; Servicio el Escudo, S.A. de C.V.; Servicio el Rescaño, S.A. de C.V.; Servicio Jinetes, S.A. de C.V.; Servicio la Montañesa, S.A. de C.V.; Servicio Ojo de Agua, S.A. de C.V.; Servicio Solares, S.A. de C.V.; Servicio Tecámac San Cipriano, S.A. de C.V.; Servicio Tenayuca, S.A. de C.V.; Servicio Tres Encinas, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos Alfareros, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos de Tizayuca, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos de Zumpango, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos Hergom, S.A. de C.V.; Oitaben Gas, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos Mexiquenses, S.A. de C.V.; Gasolinería Montevideo, S.A. de C.V.; Servicio Grillos, S.A. de C.V.; Servicio Isaura, S.A. de C.V.; Servicio Serrano, S.A. de C.V.; Servicio Ventura Puente, S.A. de C.V.; Servicio Gomasa S.A. de C.V.; Servicios Galabria, S.A. de C.V.; Novogas Tollocan, S.A. de C.V.; Grupo Ejército, S.A. de C.V.; Operadora Ermita, S.A. de C.V.; Consorcio Plan, S.A. de C.V.; Consorcio Río Consulado, S.A. de C.V.; Servieje, S.A. de C.V.; Servicio Gasget, S.A. de C.V.; Servicio Cualimex, S.A. de C.V.; Servicio Santalbi, S.A. de C.V.; JAPI, S.A. de C.V.; Operadora Aguesu, S.A. de C.V.; Servicio el Hueso, S.A. de C.V.; y Luis Caballero Navarro.

SEGUNDO. Se impone una multa en los términos expuestos en la presente resolución a G500, S.A.P.I. de C.V.; Administradora de Gasolineras Esmegas, S.A. de C.V.; El Faro de Santander, S.A. de C.V.; Energéticos Tec, S.A. de C.V.; Fuente las Varas, S.A. de C.V.; Gasolinera Valle de Guadalupe, S.A. de C.V.; Gasomira, S.A. de C.V.; Grupo Jimmex, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Aja Gomez, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Igova, S.A. de C.V.; Puente los Arrollos, S.A. de C.V.; Puerto Alisas, S.A. de C.V.; Río Tuerto, S.A. de C.V.; Servicio Alisas, S.A. de C.V.; Servicio Cubija, S.A. de C.V.; Servicio Cubija II, S.A. de C.V.; Servicio el Escudo, S.A. de C.V.; Servicio el Rescaño, S.A. de C.V.; Servicio Jinetes, S.A. de C.V.; Servicio la Montañesa, S.A. de C.V.; Servicio Ojo de Agua, S.A. de C.V.; Servicio Solares, S.A. de C.V.; Servicio Tecámac San Cipriano, S.A. de C.V.; Servicio Tenayuca, S.A. de C.V.; Servicio Tres Encinas, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos Alfareros, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos de Tizayuca, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos de Zumpango, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos Hergom, S.A. de C.V.; Oitaben Gas, S.A. de C.V.; Servicios Energéticos Mexiquenses, S.A. de C.V.; Gasolinería Montevideo, S.A. de C.V.; Servicio Grillos, S.A. de C.V.; Servicio Isaura, S.A. de C.V.; Servicio Serrano, S.A. de C.V.; Servicio Ventura Puente, S.A. de C.V.; Servicio Gomasa S.A. de C.V.; Servicios Galabria, S.A. de C.V.; Novogas Tollocan, S.A. de C.V.; Grupo Ejército, S.A. de C.V.; Operadora Ermita, S.A. de C.V.; Consorcio Plan, S.A. de C.V.; Consorcio Río Consulado, S.A. de C.V.; Servieje, S.A. de C.V.; Servicio Gasget, S.A. de C.V.; Servicio Cualimex, S.A. de C.V.; Servicio Santalbi, S.A. de C.V.; JAPI, S.A. de C.V.; Operadora Aguesu, S.A. de C.V.; Servicio el Hueso, S.A. de C.V.; y Luis Caballero Navarro.



1463

Pleno
RESOLUCIÓN
G500, S.A.P.I. de C.V. y otros
Incidente de verificación de cumplimiento y ejecución
Expediente COND-002-2017-I

Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el PLENO, por unanimidad de votos, en sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos citados a lo largo de la presente resolución, ante la fe del ST, de conformidad con los artículos 2, fracción VIII; 4, fracción IV, 18, 19 y 20, fracciones XXVI, XXVII y LVI, del ESTATUTO.

Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidenta

Jesús Ignacio Navarro Zermeno
Comisionado

Eduardo Martínez Chombo
Comisionado

Brenda Gisela Hernández Ramírez
Comisionada

Alejandro Faya Rodríguez
Comisionado

José Eduardo Mendoza Contreras
Comisionado

Gustavo Rodrigo Pérez Vardespín
Comisionado

Fidel Gerardo Sierra Aranda
Secretario Técnico

SIN TEXICO